

ENCUESTA

CIUDADANÍA, DEMOCRACIA Y NARCOVIOLENCIA (CIDENA) 2011

Raúl Benítez Manaut
Editor



ENCUESTA

CIUDADANÍA, DEMOCRACIA Y NARCOVIOLENCIA (CIDENA) 2011

Raúl Benítez Manaut
Editor





CIUDADANÍA, DEMOCRACIA Y NARCOVIOLENCIA (CIDENA) 2011

Raúl Benítez Manaut (editor)

Responsables académicos de la encuesta

Raúl Benítez Manaut, CASEDE e investigador de la UNAM

Azucena Cháidez, SIMO

Marco Iván Escotto, CEGI-IPADE

Felipe González y González, CEGI-IPADE

Edgar Valle, SIMO

Instituciones responsables

Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A. C. (CASEDE)

Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional (CEGI)

del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE)

Sistemas de Inteligencia en Mercados de Opinión, S. C. (SIMO)

El contenido de la Encuesta Ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia (CIDENA), 2011 es responsabilidad exclusiva de sus autores y los derechos son propiedad de las instituciones señaladas. Su reproducción parcial o total requiere de una autorización por escrito de las mismas.

© Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A.C. (CASEDE)

Publicación a cargo del Colectivo de Análisis

de la Seguridad con Democracia, A. C.

Héroes de Padierna 166, colonia San Jerónimo,

CP 10200, México DF

Primera edición: julio de 2012.

ISBN: 978-607-95380-3-3

Publicación y versión completa de la encuesta en

www.seguridadcondemocracia.org

Diseño y formación:

Adriana Méndez Raymundo y alejandropo (Alejandro Pérez Olvera)

Cuidado editorial:

Atril, excelencia editorial, por Diego Bugeda Bernal

Prohibida su reproducción parcial o total por cualquier medio.

Hecho en México

Printed in Mexico

Esta investigación ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos por medio de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID). El contenido de la Encuesta no refleja necesariamente el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos de América.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	7
NOTA METODOLÓGICA	9
Capítulo 1 NARCOTRÁFICO Y OPINIÓN PÚBLICA. MITOS Y REALIDADES. <i>Raúl Benítez Manaut</i>	11
Capítulo 2 NARCOTRÁFICO, PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD Y COMPORTAMIENTO POLÍTICO <i>Mario Arroyo Juárez y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara</i>	25
Capítulo 3 CONFIANZA Y PARTICIPACIÓN. ECONOMÍA, SOFISTICACIÓN POLÍTICA Y CAPITAL SOCIAL <i>Felipe González y González y Rodrigo de León González</i>	37
Capítulo 4 SEGURIDAD, ¿A QUÉ COSTO? DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES CIVILES <i>Azucena Cháidez y Edgar Valle</i>	43
ANEXO	51

ÍNDICE DE CUADROS

CAPÍTULO 1

1. Homicidios vinculados al crimen organizado, 2001-2006	15
2. Homicidios vinculados al crimen organizado, 2007-2011	16
3. El próximo presidente de México, ¿debe seguir el combate o debe negociar con el narcotráfico?	20
4. Algunas personas dicen que para acabar con el narcotráfico en México va a ser necesario perder algunas libertades y derechos	20
5. El gobierno, ¿debe recurrir al maltrato físico o respetar los derechos humanos?	21
6. En su opinión, ¿el gobierno está ganando o perdiendo la guerra contra el narcotráfico?	22

CAPÍTULO 2

1. ¿Qué tan seguro se siente en presencia del Ejército?	26
2. Por temor a ser víctima de la violencia relacionada con el narcotráfico durante 2011 dejó de...	28
3. ¿Cuál sería la mejor estrategia para solucionar el problema del narcotráfico?	31
4. ¿Considera usted que el combate al narcotráfico puede impedir la consolidación de la democracia en el país?	32
5. Delitos denunciados con averiguación previa y “cifra negra”	33

CAPÍTULO 3

1. Confianza institucional: ¿qué tanto aprueba o desaprueba la forma en que el presidente de la República, el Ejército, la Marina y los jueces realizan su trabajo?	38
2. ¿Cómo calificaría la actual situación económica del país?	39
3. Pensando en los próximos 12 meses, ¿usted diría que la economía del país mejorará o empeorará?	39
4. ¿Usted o algún miembro de su familia participa en alguna organización de la sociedad civil?	40
5. Qué tan probable o poco probable es que en su colonia o comunidad la gente se organice para...	41
6. Para resolver problemas en su comunidad, ¿qué tan dispuesto estaría a aportar...?	41
7. Cuando cree que está en lo correcto, ¿usted estaría dispuesto a actuar en contra de lo establecido por la ley?	42

CAPÍTULO 4

1. ¿Usted qué tanto aprueba o desaprueba las acciones del gobierno para combatir al narcotráfico?	44
2. Algunas personas piensan que es válido recurrir al maltrato físico en la guerra contra el narcotráfico	46

3. ¿Se deben preservar o sacrificar las libertades en el combate al narcotráfico?	48
4. Algunas comunidades asediadas por la violencia han empezado a tomar justicia por su propia mano y han linchado delincuentes. ¿Qué tan de acuerdo está usted con que las comunidades se organicen para linchar delincuentes?	49
5. Algunas comunidades asediadas por la violencia del narcotráfico han empezado a organizarse para crear grupos de autodefensa. ¿Qué tan de acuerdo está usted con que las comunidades se organicen en grupos de autodefensa?	49

ANEXO DE GRÁFICAS

1. ¿Qué tanto aprueba o desaprueba la forma en que las instituciones del Estado realizan su trabajo?	51
2. Independientemente de su situación económica personal, ¿cómo calificaría la actual situación económica del país? Diría que es...	52
3. Independientemente de su situación económica personal, durante los últimos 12 meses usted diría que la economía del país ha mejorado o ha empeorado? ¿mucho o algo?	52
4. ¿Está de acuerdo en confiscar los bienes de los sospechosos de narcotráfico, aunque no existan pruebas en su contra?	53
5. En su opinión, ¿debería legalizarse el consumo de marihuana?	53
6. En su opinión, ¿debería legalizarse el matrimonio entre personas del mismo sexo?	53
7. ¿Cómo calificaría al sistema de justicia penal en su estado?	54
8. ¿Ha escuchado sobre la reforma penal que incluye la incorporación de juicios orales en la impartición de justicia?	54
9. En su opinión esta reforma penal ...	54
10. ¿Debe el próximo presidente continuar la guerra contra el narcotráfico?	55
11. ¿Diría usted que la mayoría de la gente es confiable o que la mayoría de las veces uno debe cuidarse las espaldas?	55
12. ¿El gobierno debe arrestar sospechosos de ser narcotraficantes?	56
13. Esto que me acaba de responder podría implicar que habría personas que podrían estar encerradas sin que existen pruebas en su contra. Si este fuera su caso, ¿seguiría apoyando o se opondría a su detención?	56
14. ¿Está de acuerdo con que se recurra al maltrato físico para extraer información de los sospechosos?	56
15. Si recurre a la tortura, el gobierno podría violar los derechos humanos de gente inocente. Si este fuera el caso, ¿seguiría apoyando el maltrato físico o se opondría?	56

16. ¿Qué tan seguro se siente en presencia del Ejército?	57
17. ¿Cree usted que el Ejército ha sido corrompido por el narcotráfico?	57
18. En su opinión, ¿está el gobierno ganando la guerra contra el narcotráfico?	57
19. ¿Cuál cree usted que sería la mejor opción para solucionar el problema del narcotráfico?	57
20. ¿Con cuál de las siguientes decisiones políticas estaría usted más de acuerdo?	57
21. ¿Qué tanto aprueba usted las acciones del gobierno para combatir al narcotráfico?	58
22. ¿Qué tan de acuerdo está usted con que las comunidades se organicen para linchar delincuentes?	58
23. ¿Qué tan de acuerdo está usted con que las comunidades se organicen en grupos de autodefensa?	58
24. ¿Qué considera más importante, que el gobierno fortalezca la seguridad pública o que combata a los narcotraficantes?	59
25. ¿Considera usted que el combate al narcotráfico puede impedir la consolidación de la democracia en el país?	59
26. ¿Por cuál de las siguientes razones cree usted que el presidente decidió emprender la lucha contra el narcotráfico?	59
27. ¿Cuál de los siguientes grupos considera usted que ha ayudado más a disminuir los efectos de la violencia derivada del narcotráfico?	60
28. Para protegerse de la violencia relacionada con el narcotráfico, ¿se tomaron algunas de las siguientes medidas en su casa?	60
29. Algunos centros de trabajo están tomando medidas de seguridad. Durante este año, para protegerse de la violencia relacionada con el narcotráfico, ¿se tomaron algunas de las siguientes medidas en su trabajo?	61
30. ¿Algún familiar fue asesinado o murió de manera violenta en el último año?	61
31. ¿Experimentó usted algún suceso violento durante el último año?	62
32. ¿Participa activamente usted o algún miembro de su familia en alguna organización de la sociedad civil?	62
33. ¿Participa en alguna de las siguientes organizaciones?	63
34. ¿Qué tan probable o poco probable es que en su colonia o comunidad la gente se organice para resolver problemas de...?	63
35. Para resolver problemas en su comunidad, ¿qué estaría usted dispuesto a aportar?	64
36. La gente no colabora para resolver problemas o necesidades en su colonia/comunidad porque...	64
37. Cuando cree que está en lo correcto, ¿usted estaría dispuesto a actuar en contra de lo establecido por la ley?	64

PRESENTACIÓN

La Encuesta *Ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia (CIDENA) 2011*, forma parte de un proyecto de investigación multi institucional encabezado por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A. C. (CASEDE), en el cual también participaron Sistemas de Inteligencia en Mercados y Opinión, S.C. (SIMO) y el Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional (CEGI) del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE). Las tres instituciones unieron esfuerzos para diseñar la metodología, plantear las preguntas, realizar el levantamiento y, finalmente, elaborar el análisis detallado de hallazgos que se desprenden de las 7, 416 encuestas levantadas tanto a nivel nacional como en los estados de Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Nuevo León. El criterio de selección de los estados fueron las diferencias en los niveles de violencia asociada al narcotráfico entre ellos, ya que Chihuahua, Guerrero, Michoacán y Nuevo León presentan una intensidad alta de violencia; Jalisco y el Estado de México un nivel medio; y el Distrito Federal un nivel bajo.

Los temas de la encuesta incluyeron la forma en que la violencia influye en la actividad económica y en la confianza en distintas instituciones clave de los gobiernos federal, estatales y municipales; la posible afectación del comportamiento electoral por la incidencia de la violencia, aspecto muy importante dada la cercanía del proceso electoral de 2012; el peligro en que están los valores de la democracia,

los derechos humanos y las libertades civiles; y la forma como la violencia ha alterado la vida cotidiana de las personas, así como otros aspectos vinculados con la formación de capital social.

El entusiasmo con el que emprendimos esta tarea se desprendió de la convicción de que el aumento de la violencia asociada al crimen organizado puede afectar el difícil y largo proceso de consolidación de la democracia, así como corroer el capital social y la actividad económica del país. Los ciudadanos, vistos primeramente como seres humanos, tienen derecho a vivir en condiciones de resguardo de sus libertades y de defensa de sus bienes. La actividad criminal en algunas regiones, como el norte y algunos estados como Michoacán, ya está vulnerando esa condición primordial. Por ello, ponemos a debate la información desprendida de la encuesta, como un grano de arena para poder analizar la complejidad del fenómeno delictivo que vive la nación. La responsabilidad sobre la encuesta, la muestra y la presentación de sus resultados recae enteramente en los autores de la misma.

RAÚL BENÍTEZ MANAUT, presidente del CASEDE e investigador de la UNAM
AZUCENA CHÁIDEZ, directora asociada de SIMO
FELIPE GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, presidente ejecutivo del CEGI
EDGAR VALLE, director asociado de SIMO

Mayo de 2012

NOTA METODOLÓGICA

La Encuesta *Ciudadanía, Democracia y Narcoviolenencia (CIDENA) 2011*, se realizó a nivel nacional a hombres y mujeres mayores de 18 años habitantes de los Estados Unidos Mexicanos. El levantamiento se llevó a cabo entre el 10 de mayo y el 9 de junio de 2011, cara a cara, en vivienda. La muestra consistió en un total de 7,416 entrevistas a nivel nacional.

Para la selección de las secciones electorales se elaboró una muestra diseñada bajo un esquema de muestreo estratificado, complejo, probabilístico y proporcional al tamaño.

Para los fines de la encuesta se quería comparar los resultados en estados con diferentes niveles de violencia. Para ello se tomó como base el número de ejecutados. Los datos sobre los homicidios vinculados al crimen organizado se recolectaron de tres periódicos de circulación nacional: *Reforma*, *El Universal* y *Milenio*. La muestra se compuso por siete estados con tres niveles de violencia diferentes:

- ***Estados con alta intensidad de violencia:*** Chihuahua, Guerrero, Michoacán y Nuevo León.
- ***Estados con intensidad media de violencia:*** Jalisco y Estado de México
- ***Estado con baja intensidad de violencia:*** Distrito Federal.

La muestra incluyó estados gobernados por los tres partidos: Chihuahua (PRI); Distrito Federal (PRD); Estado de México (PRI); Guerrero (PRD); Jalisco (PAN); Michoacán (PRD); y Nuevo León (PRI).

Los cuestionarios se distribuyeron de la siguiente manera: 900 casos para cada uno de los estados seleccionados, con un margen de error de +/- 3.3% y un 95% de confianza, excepto para el estado de Guerrero, en el cual se realizaron 816 entrevistas, con un margen de error de +/- 3.5%. A nivel nacional el margen de error es de +/-1.1 %, con un 95% de confianza.

<i>Tipo de estudio</i>	<i>7, 416 encuestas en viviendas, persona a persona</i>
<i>Fecha de levantamiento</i>	<i>10 de mayo al 9 de junio de 2011</i>
<i>Población objetivo</i>	<i>Hombres y mujeres mayores de 18 años</i>
<i>Metodología de muestreo</i>	<i>Se seleccionaron 618 secciones electorales con 12 entrevistas por sección, sumando un total de 7,416 entrevistas a nivel nacional</i>
<i>Marco muestral</i>	<i>El marco muestral utilizado está formado por un listado de las secciones electorales del IFE con la Lista Nominal de Electores actualizada a 2011</i>
<i>Método de selección para secciones electorales</i>	<i>La muestra se seleccionó a través de un muestreo estratificado, complejo, probabilístico y proporcional al tamaño</i>
<i>Método de recolección de datos</i>	<i>Encuestas cara a cara en vivienda</i>
<i>Representatividad</i>	<i>Nacional</i>
<i>Nivel de confianza y error de estimación</i>	<i>El margen de error de estimación teórico es de +/-1.1%. con un 95% de confianza</i>



NARCOTRÁFICO Y OPINIÓN PÚBLICA. MITOS Y REALIDADES

Raúl Benítez Manaut¹

Opinión pública y opinión especializada. La brecha

En México se da una distancia notable entre la llamada “opinión pública”, medida a través de encuestas a población abierta, y la opinión de la sociedad civil organizada respecto de la estrategia del presidente Felipe Calderón. La sociedad civil está organizada en movimientos de víctimas, organizaciones no gubernamentales, la academia, los empresarios, el clero y los medios de comunicación. Incluso, la opinión de algunos académicos extranjeros y *think tanks*, sobre todo los de Estados Unidos, también repercute en México y es transmitida a la población mexicana. En casi todos estos sectores predominan las críticas al gobierno de Calderón y a su estrategia de combate al narcotráfico. A esto le llamamos una brecha insalvable. Así, el presidente Calderón tiene el apoyo de la ciudadanía y los especialistas lo condenan.

Todos estos elementos fueron captados por la Encuesta *Ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia (CIDENA) 2011*. Esta última es un instrumento no de coyuntura, sino que aporta información valiosa para antropólogos, psicólogos, sociólogos y expertos en medios masivos de comunicación. La encuesta es una fotografía del impacto del narcotráfico y sus acciones en la opinión pública en 2011, a cinco años de haberse implementado la estrategia de “guerra contra el narcotráfico” por el presidente Felipe Calderón.

¹ Investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y presidente de CASEDE.

Como político, a pesar de los cuestionamientos, si el presidente Calderón cuenta con una opinión favorable entre la población sobre la gestión de su gobierno, esta es una razón importante para saber por qué no se vislumbra un cambio en la estrategia seleccionada. Él no percibe esa necesidad, ni siquiera por motivos electorales. Ante la cercanía del proceso electoral de julio de 2012, ninguno de los aspirantes a la Presidencia con posibilidades de participar de forma importante en la carrera ni ha elaborado una opción alternativa para el combate al narcotráfico, ni ha criticado los instrumentos principales empleados por el presidente Calderón, como lo son las fuerzas armadas. Los tres candidatos presidenciales con posibilidades de acceder al poder en México en 2012, Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota, coinciden en la continuidad de la presencia de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico, y los tres señalan la misma estrategia para su retiro. Afirman que será cuando existan cuerpos policíacos con las capacidades, el tamaño y la eficiencia para que puedan sustituir el despliegue de la milicia. Ninguno señala periodos probables de tiempo y menos aún se han mencionado estrategias alternativas a la instrumentada por el presidente Calderón.

Opinión pública y seguridad. Experiencias internacionales

En América Central, en los años ochenta, al estallar los conflictos civiles, los movimientos armados revolucionarios incrementaron su accionar para enfrentar a los gobiernos militares que tenían una práctica de ejercicio del poder basada en la represión y las notables violaciones a los derechos humanos. Segmentos importantes de la población respaldaron a estos gobiernos. Otros apoyaron a las guerrillas, con diferencias visibles entre los países. En El Salvador, la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) fue apoyada por un sector de la población, y nunca bajó del 30 por ciento del voto a su favor en los sucesivos procesos electorales después de firmada la paz en 1992. Por su parte, el partido de extrema derecha, ARENA, firme aliado de las fuerzas armadas, logró gobernar desde 1989 hasta 2009, también con un amplio respaldo de la ciudadanía. En Guatemala la izquierda siempre ha sido muy débil electoralmente, y los partidos de derecha, muchos de ellos cercanos a las fuerzas armadas, a pesar de ser público que en el pasado éstas fueron culpables de graves violaciones a los derechos humanos, han recibido el respaldo de la población. Ello llevó a un general retirado, Otto Pérez Molina, a la Presidencia de Guatemala en enero de 2012. En Colombia sucedió algo parecido durante los últimos diez años. La población dió un amplio voto de confianza al presidente Álvaro Uribe durante todo su gobierno. Al terminar su gestión en 2010, de forma impresionante gozaba de más de 70 por ciento de las simpatías populares, debido a la instauración de la llamada Política de Seguridad Democrática, mediante la cual pudo someter a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y lograr extender la idea de que se trata de una agrupación narcoterrorista a la que había que derrotar con todos los medios a su alcance.

Por otro lado, en Estados Unidos se observan fenómenos similares. Cuando las Torres Gemelas fueron atacadas por células del grupo terrorista *Al Qaeda* el 11 de septiembre de 2001, el presidente George W. Bush desplegó una amplia campaña mediática muy exitosa,

cuyo objetivo era obtener el apoyo de la población para elaborar su estrategia de contención del nuevo enemigo. En lo interno, un mes después logró la aprobación del Acta Patriótica en el Congreso y elaboró la nueva doctrina de seguridad basada en la llamada *Homeland Security* (seguridad de la patria); y en lo externo logró amplios respaldos en la comunidad internacional para aplicar su estrategia contra el terrorismo. Lo mismo sucedió en España y en otros países como Alemania, con la elaboración de leyes contra los grupos terroristas (contra la ETA, principalmente). En muchas otras naciones las llamadas políticas duras, o el empleo de los militares, han sido bien vistas por segmentos amplios de la población, en parte debido a campañas mediáticas muy bien elaboradas.

Sin embargo, en contextos de elevada participación de las fuerzas militares o policíacas en un país para enfrentar un problema de seguridad generalmente la opinión pública se divide. Eso sucede en México, con la peculiaridad de que la opinión pública respalda el empleo de las fuerzas armadas y el esfuerzo del presidente, y la opinión de los especialistas, así como la de algunos sectores políticos, académicos, grupos empresariales y otros actores de la vida nacional cuestionan ampliamente su estrategia. Por ello, México no se distingue de otros países. La población en general siempre busca seguridad y pretende que se la otorgue el gobierno, como obligación legal y constitucional, ética y moral. En México la guerra contra el narcotráfico ha atemorizado a la población, principalmente en algunos estados del norte del país. La violencia de los cárteles es vista día a día por los mexicanos a través de la televisión, y todos los ciudadanos se preocupan por la posibilidad de ser secuestrados, extorsionados o incluso de perder la vida sin motivo. En otras palabras, la población se siente inerte y con miedo. La vida cotidiana de los mexicanos ha cambiado, sus costumbres, la confianza en las instituciones y la confianza en “la calle” como un lugar público para el disfrute de la ciudadanía. Esto ha sido captado nítidamente por la Encuesta CIDENA 2011.

El contexto. El ascenso de la violencia criminal

Desde fines de los noventa del siglo xx los sindicatos criminales ya eran una amenaza para la transición democrática,² debido a que los cárteles de la droga fueron acumulando un gran poder económico, al transformarse de intermediarios de los colombianos en dueños del negocio por la posición geográfica del país.³ El narcotráfico en México fue tolerado por ambos gobiernos: el de Estados Unidos y el mexicano. Se trataba de una actividad ilegal pero activa y se realizaba sin muchos obstáculos reales desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

A inicios del siglo XXI cambia el parámetro y los narcotraficantes actúan en un terreno muy fértil por dos razones: en México existe un Estado en transición hacia la democracia, con una rotación de élites muy rápida, y Estados Unidos se concentró desde el 11

² John Bailey y Roy Godson (editores) *Crimen organizado y gobernabilidad democrática. México y la franja fronteriza*, Grijalbo, México, 2000.

³ Bruce Bagley, “La conexión Colombia-México-Estados Unidos”, en Raúl Benítez Manaut, Abelardo Rodríguez y Armando Rodríguez (editores), *Atlas de la seguridad y la defensa de México 2009*, México, 2009, p. 24.

de septiembre de 2001 en la guerra contra el terrorismo, reduciéndose el “nivel de la amenaza” del narcotráfico. Los cárteles aprovecharon que la seguridad nacional de Estados Unidos se centraba en el combate al terrorismo y se desarrollaba en otras regiones del planeta, mientras que la demanda de drogas seguía siendo el factor detonante de la actividad, sin que los esfuerzos realizados para reducir la producción y el consumo fueran exitosos. Es el caso de la producción y exportación de cocaína desde Colombia, que no ha reducido sustancialmente sus volúmenes, a pesar de la instrumentación del Plan Colombia iniciado a fines de 1998 y principios de 1999.

En su toma de posesión el primero de diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón le declaró la “guerra” al narcotráfico y a la par se desprendió el empleo intensivo de las instituciones del Estado propias para tal propósito, que son las militares. Lo que se está cuestionando en México es la estrategia y el resultado del instrumento empleado por esa guerra, no que se combata al narcotráfico. La mayoría de los analistas sostienen que esta declaración de “guerra” del gobierno no era necesaria, ya que al enfrentamiento existente entre los cárteles, que había provocado 8,907 muertos durante los seis años del gobierno de Vicente Fox, se suma la acción del gobierno, que incrementa a su vez la guerra entre los cárteles, en una especie de círculo vicioso, que deriva en los aproximadamente 50 mil muertos desde el inicio de la administración actual. Declarar la guerra a algo por un gobierno es muy peligroso, porque se corre el riesgo de que no se logren victorias rápidas. Cuando los gobiernos latinoamericanos declaran la “guerra a la pobreza” (y lo han hecho en múltiples ocasiones, tanto a nivel nacional como en foros multilaterales), en muy pocas ocasiones han tenido éxito. Lo mismo sucede con la guerra al narcotráfico. El problema al declarar la guerra por el presidente Calderón es que necesariamente debe emplear al aparato del Estado apropiado para enfrentarla, las fuerzas armadas, lo que deriva en un fenómeno de fortalecimiento de éstas en el seno del Estado, y en una “militarización”, sobre todo en los llamados “frentes de guerra”, que son los estados donde se observa esta violencia homicida, encabezando la estadística Chihuahua, en particular Ciudad Juárez.

Otra característica de esta guerra es su naturaleza transnacional. El narcotráfico colombiano abrió un corredor criminal y con ello una “zona de inseguridad” entre Colombia y el sur de Estados Unidos. Esta “guerra”, en el caso de los países de Centroamérica y México, amenaza los frágiles sistemas democráticos de gobierno de forma notable, debido a que provoca gran corrupción gubernamental, descomponiendo al Estado y generando un nuevo proceso de militarización.⁴ En Estados Unidos se ha definido a estos conflictos como “guerras criminales”, e implican que su naturaleza es muy diferente a las guerras contra el terrorismo.⁵ Las “guerras criminales” no son ideológicas ni buscan destruir la civilización occidental ni la economía de mercado; por el contrario, los grupos criminales internacionales se basan en las estructuras de la democracia y la globalización, y su objetivo es la acumulación de poder económico y político. Las guerras del narcotráfico en América Latina serían la versión más desarrollada de las guerras criminales, por el poder

⁴ Vanda Felbab-Brown, “Narcotics International, Inc.”, *Americas Quarterly*, primavera de 2010, p. 42.

⁵ Bob Killebrew y Jennifer Bernal, *Crime Wars. Gangs, Cartels and U.S. National Security*, Center for a New American Security, Washington, 2010.

acumulado de los sindicatos colombianos en los años noventa del siglo xx (los cárteles de Medellín y Cali), y de los mexicanos en el siglo xxi. De esta manera, en México las agrupaciones criminales más poderosas son el Cártel del Pacífico, encabezado por Joaquín Guzmán (el *Chapo*) y los Zetas.

Según el entonces vocero del gobierno de México, Alejandro Poiré, en el año 2010 la guerra entre los cárteles del narcotráfico se concentraba en 162 municipios del país (de un total de casi 2,400), y en todos los conflictos está involucrado el Cártel del Pacífico. La información señala que el 80 por ciento de los más de 28 mil muertos (hacia fines de agosto de 2010) se dan debido a los siete principales conflictos entre los cárteles de la droga. Los siete conflictos son los siguientes: 1) Pacífico vs. Juárez; 2) Pacífico vs. Beltrán Leyva; 3) Pacífico vs. Golfo-Zetas; 4) Pacífico vs. Arellano Félix; 5) Familia vs. Golfo y Zetas; 6) Familia vs. Beltrán; 7) Golfo vs. Zetas.⁶ De esta guerra, entre mil y dos mil homicidios se dieron contra víctimas inocentes, ya sea en enfrentamientos entre los cárteles, o cuando el gobierno realizaba algún operativo, y por causa de las ofensivas del gobierno, y debido a las represalias de los cárteles se generan entre 500 y mil funcionarios gubernamentales muertos, la mitad de ellos militares. De esta forma, aunque el 95 por ciento de los homicidios fueron entre criminales, el impacto entre los inocentes es elevado y es el que afecta más al gobierno en el nivel político. De este último se desprende la afirmación de que estamos frente a una guerra “fracasada” y que tiende a aumentar en violaciones a los derechos humanos.

El gobierno mexicano comenzó a ser amenazado en su estabilidad por los cárteles, debido a que fueron abriendo territorios y acumulando poder. La violencia entre los cárteles llevó a que empezara una guerra entre sus integrantes por mercados y rutas de tránsito hacia Estados Unidos. Entre los años 2001 y 2006, las ejecuciones y homicidios se dieron de la siguiente manera:

Cuadro 1
Homicidios vinculados al crimen organizado
2001-2006

Año	Número de homicidios
2001	1,080
2002	1,230
2003	1,290
2004	1,304
2005	1,776
2006	2,221
Total	8,901

Fuente: “Drug Violence in Mexico, Data and Analysis from 2001-2009”, Trans-border Institute, University of San Diego, 2009.

⁶ “80% de las ejecuciones ocurrieron en 162 municipios”, *El Universal*, México, 27 de agosto de 2010.

En otras palabras, se da un crecimiento de la modalidad de realizar asesinatos entre las bandas rivales como medio de competir por los cargamentos de cocaína, proveniente de Colombia, marihuana y amapola (básicamente de Sinaloa), y recientemente anfetaminas y sus precursores, provenientes de China. Si la tendencia actual continúa, el sexenio del presidente Calderón culminaría con más de 50 mil homicidios provocados por la acción del crimen organizado y en menor medida por la reacción del Estado. Por este clima de inseguridad es que podemos afirmar la hipótesis de que la guerra entablada entre las siete grandes organizaciones criminales que actualmente existen en México es la principal amenaza a la democracia. Si se compara esta cifra con su aumento durante el actual gobierno del presidente Felipe Calderón, se da un crecimiento de cinco veces el nivel de homicidios, como se observa en el Cuadro 2:

Cuadro 2
Homicidios vinculados al crimen organizado
2007-2011

Año	Número de homicidios
2007	2,275
2008	5,219
2009	6,587
2010	11,583
2011	12,366
Total	38,030

Fuente: “Ejecutómetro”, *Reforma*, 12 de enero de 2012.

El reclamo de información y las críticas a la guerra

Las opiniones están polarizadas. Hay quienes postulan que el Estado “no puede” ante el poder de los grandes cárteles y que las instituciones han sido penetradas, ante lo cual habría que dar un giro total de la estrategia.⁷ A la par, algunos proponen que se deberían realizar cambios de ley que tiendan a la legalización del consumo de algunas drogas ligeras

⁷ Rubén Aguilar V. y Jorge G. Castañeda, *El narco: la guerra fallida*, Santillana, México, 2009.

como la marihuana, y no considerar delincuentes a los consumidores.⁸ En el otro extremo, el propio gobierno impulsa la “mano dura”, a través de las fuerzas armadas y de las policías federales; elabora diagnósticos que señalan que el aumento de la violencia es pasajero, que se llegará a un pico y que el desmembramiento de los grandes cárteles poco a poco redundará en mayor seguridad, disminución de las tasas de violencia, y que se recuperarán las capacidades de gobernabilidad.⁹ En realidad ningún diagnóstico ha sido lo suficientemente contundente para saber si se está ganando o perdiendo la “guerra”, pues claramente el debate no ha pasado a un escalón analítico superior y sólo pone el énfasis en el factor de violencia homicida entre los cárteles como elemento de medición. El propio presidente Calderón, a mediados de 2010, en un cambio radical de su discurso (no en la implementación de las estrategias del gobierno), señala que el combate a los cárteles es para lograr la “seguridad pública”.¹⁰ Este cambio de timón discursivo se debió a la presión de la opinión especializada e incluso de la internacional.

El gobierno mexicano, por la herencia autoritaria propia de los gobiernos de la Revolución Mexicana encabezados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), hasta diciembre del año 2000 tenía poco contacto con la sociedad civil, la academia y la prensa, pues la información que se autorizaba para el debate público era contradictoria, limitada y frecuentemente –es el caso del combate a las organizaciones criminales–, se amparaba en las cláusulas de seguridad nacional para no tener que informar.¹¹ Así, los mexicanos se documentan a través de “filtraciones” de documentos que hacen los propios funcionarios –muchas veces deliberadamente autorizadas por sus superiores–, de seguimientos de los medios de comunicación –por ejemplo, el conteo de ejecuciones que realizan cuatro periódicos con gran detalle y mérito–, y lo más grave: la información que tiene la mayor credibilidad es aquella hecha pública desde el extranjero, principalmente en Estados Unidos. Esto ha sucedido con la Iniciativa Mérida, en que la información proviene de la parte estadounidense principalmente. En el seno del gobierno mexicano son comunes también las rivalidades y competencias interinstitucionales; y no existe una centralización de la información sobre el narcotráfico, los cárteles y en general la seguridad nacional, lo que da pie a grandes confusiones, además de que también en muchas ocasiones la prensa compite por enfatizar las “notas rojas” y se hace aparecer al país como un Estado incapaz, o incluso hasta fracasado.

⁸ Héctor Aguilar Camín, ponencia en los “Diálogos por la seguridad”, México, Presidencia de la República, 3 de agosto de 2010.

⁹ Joaquín Villalobos, “Doce mitos de la guerra contra el narco”, www.nexos.com, 1º de enero de 2010.

¹⁰ Felipe Calderón “La lucha por la seguridad pública”, junio de 2010, en www.presidencia.gob.mx/prensa/lucha_seguridad_publica/

¹¹ La Ley de Seguridad Nacional emitida en 2005 contiene una cláusula de “Seguridad Nacional”, mediante la cual las instituciones del gobierno pueden negarse a otorgar información a la ciudadanía, la prensa o la academia. En los hechos, esta cláusula nulifica los avances logrados en la Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental de 2002 en los temas concernientes a seguridad nacional y defensa. Se ha estado intentando reformar esta ley desde 2008 en el Senado y la Cámara de Diputados, sin éxito.

En los “Diálogos por la Seguridad”, del 3 de agosto de 2010, el sector académico demandó al presidente Felipe Calderón que el gobierno mantuviera informada de manera frecuente y coherente a la sociedad civil, sobre el resultado de esa guerra. Los académicos presentes mostraron pruebas sobre las grandes contradicciones informativas y estadísticas que publicaban las distintas instituciones del gobierno, debido a la falta de centralización, esquema mediante el cual seis dependencias del gobierno federal proporcionaban cada cual su información, y ésta no tenía correspondencia con las otras fuentes oficiales, y menos aún con la divulgada por la prensa o las fuentes estadounidenses. A partir de dichos diálogos, en el portal electrónico de la Presidencia de la República comenzaron a publicarse los datos oficiales de los homicidios, desagregados hasta el nivel municipal, constituyendo una contribución muy importante para el análisis académico y para la prensa sobre el fenómeno criminal.

Respecto de los medios de comunicación y la sociedad civil, podemos decir que “No hay guerra que no se gane sin el respaldo de la población”. Este refrán es un mandato cuando de ciencia militar se trata. La población de México está asolada por el impacto real y mediático de la violencia, incluso en estados del país con índices bajos o con poca presencia de las organizaciones criminales. Con frecuencia el gobierno califica a los medios de ser irresponsables por ser amarillistas, buscar sólo la “nota roja”, o engrandecer el fenómeno del narcotráfico. La cobertura de los medios extranjeros también se encuadra en esta definición. Analizar cómo los medios de comunicación abordan el problema es un gran desafío. Sin embargo, también por el impulso mediático y por la creación de una imagen de “terror” que transmiten los medios sobre la acción de los cárteles es que muchos segmentos de la población respaldan al presidente en la aplicación de la estrategia de “mano dura”. Es decir, ante la imagen de expansión del terror criminal, la población respalda al único poder que podría frenar dicho terror, el Estado. Esto lo recoge claramente la Encuesta CIDENA 2011.

Respaldo institucional

Las cifras que se presentan a continuación, desprendidas de la Encuesta CIDENA 2011, ayudan a proponer la hipótesis de que el apoyo de la población al presidente, que por consecuencia revela que su trabajo es bien visto por la ciudadanía, tanto en su gestión de gobierno como por haber emprendido el combate a los cárteles de las drogas, se da por una psicología del desamparo y de la víctima. Todos los mexicanos temen ser víctimas de los criminales, y el presidente despliega una imagen de “dureza” por emplear los recursos de la milicia de forma abierta. Calderón cuenta con la opinión positiva del 58 por ciento de la población a nivel nacional y es desaprobado por el 20 por ciento. Además, en la evaluación del desempeño global de las instituciones castrenses su imagen en la opinión pública es aún mejor que la del presidente. El Ejército y la Marina son bien vistos por el 69 por ciento de los encuestados. También sobresale la confianza que le otorga la población al Instituto Federal Electoral, que es del 60 por ciento.

Por el contrario, las instituciones policíacas fueron juzgadas severamente por los encuestados. La Policía Federal obtuvo el respaldo de sólo el 49 por ciento, siendo rechazada por el 35 por ciento. En el caso del desempeño de las policías estatales la opinión favorable fue mínima, pues sólo las respaldan el 35 por ciento de los encuestados. Otras instituciones del Estado, como los diputados, senadores, la Suprema Corte de Justicia y las policías municipales tienen una aprobación incluso inferior. La Suprema Corte de Justicia y los diputados el 34 por ciento, los jueces el 31 por ciento y los senadores el 27 por ciento. Los gobernadores tienen el apoyo del 56 por ciento de los encuestados; son los únicos que se acercan al presidente.

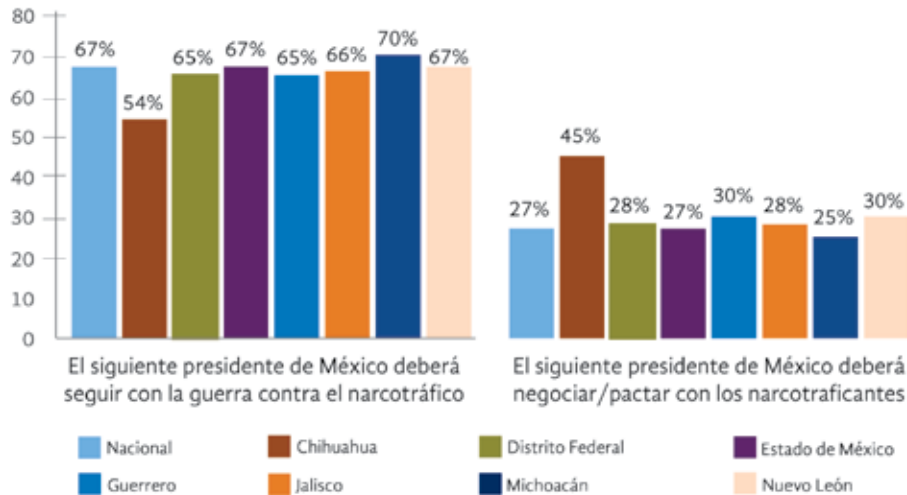
Lo anterior no es una sorpresa. Numerosas encuestas de opinión levantadas a lo largo de los últimos diez años han mostrado información similar. Incluso a nivel de la llamada confianza institucional, las tres instituciones líderes en el país que encabezan la imagen positiva de la población son las universidades, las iglesias y los militares, en rangos que van del 65 al 80 por ciento de la población en cada caso. El liderazgo entre ellas tres oscila según la coyuntura que se viva en el momento de los levantamientos de información, o cuando algún hecho negativo o un escándalo haya afectado a alguna de ellas cuando se recaba la información.

En el lado negativo, de igual manera no sorprende a nadie que las policías estén entre las peores instituciones evaluadas por la ciudadanía, y que los representantes populares en las dos cámaras del Congreso de igual manera registren opiniones similares. En el primer caso, al ser la policía uno de los primeros puntos de contacto entre la población y el Estado, por su ineficiencia, el crecimiento de la delincuencia y la elevada corrupción, de la cual todos los ciudadanos tienen experiencias personales desagradables, la institución y sus integrantes son mal evaluados. Los representantes legislativos han sido castigados por la ineficiencia en la emisión de leyes, la imagen de que los debates parlamentarios parecen en ocasiones un *ring* de boxeo, y la percepción que tienen los ciudadanos de “los políticos” en general, observándose un desencanto con *la política* y *los políticos*, por no resolver los problemas del país. Más aún, debido a que en las campañas políticas a la población le prometen la superación mágica y rápida de todos los problemas del país, y al ocupar los asientos legislativos los candidatos no vuelven a acercarse a los ciudadanos, se tiene la idea de que pasan a disfrutar del poder sin responsabilidad. La política es vista por la población como un medio para el enriquecimiento, más que como un servicio o vocación del político hacia la población.

La guerra al narcotráfico y la opinión pública

La Encuesta CIDENA 2011 formuló, asimismo, preguntas referidas a la opinión de la población sobre la continuidad de la guerra al narcotráfico: el 67 por ciento se manifestó favorable a que “el próximo presidente de México deberá seguir con la guerra contra el narcotráfico”; y el 27 por ciento se mostró en contra, con una respuesta sorprendente, declarándose a favor de que se negocie con los cárteles.

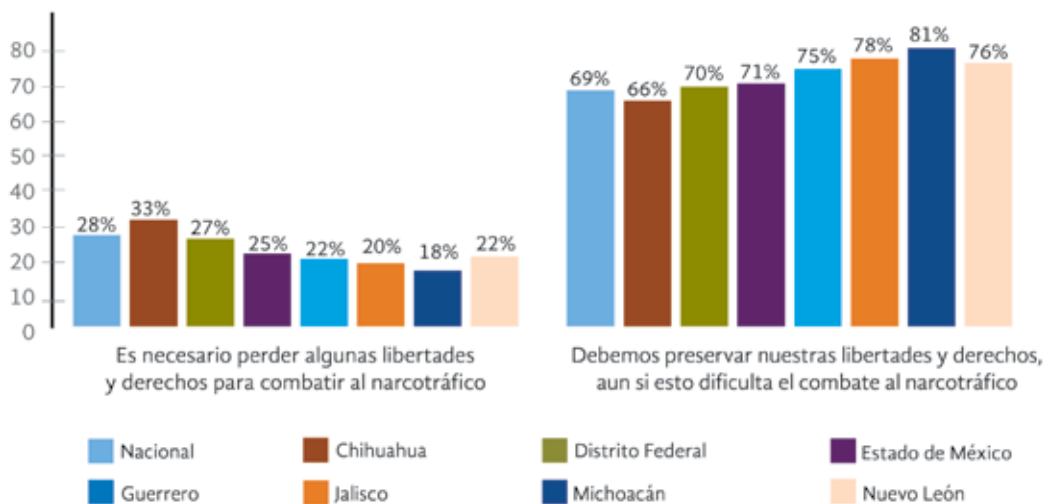
Cuadro 3
El próximo presidente de México, ¿debe seguir el combate o debe negociar con el narcotráfico?



Con la respuesta No sabe, No contesta suma 100%

Sin embargo, y muy importante para los cuestionamientos que se realizan al gobierno y los cuerpos de seguridad sobre las tácticas empleadas en la guerra contra narcotráfico, es que sólo el 28 por ciento de los encuestados señaló que es necesario perder algunas libertades y derechos para emprender esta guerra, mientras que el 69 por ciento sostuvo que se deben preservar las libertades y derechos, aunque se dificulte la misma.

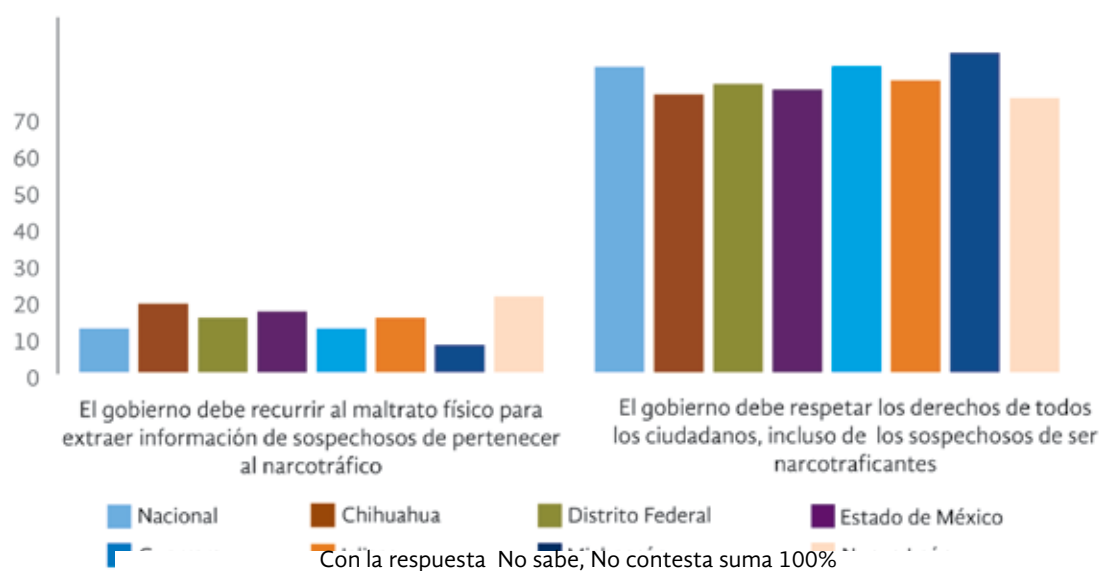
Cuadro 4
Algunas personas dicen que para acabar con el narcotráfico en México va a ser necesario perder algunas libertades y derechos



Con la respuesta No sabe, No contesta suma 100%

Sobre este mismo aspecto, destaca en la encuesta la sensibilidad de la población sobre los derechos humanos, pues el 86 por ciento de los encuestados señaló que el gobierno debe respetar los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los sospechosos de ser narcotraficantes. Por el contrario, sólo el 12 por ciento justificó que el gobierno debe recurrir al maltrato físico para extraer información de las personas sospechosas.

Cuadro 5
El gobierno, ¿debe recurrir al maltrato físico o respetar los derechos humanos?



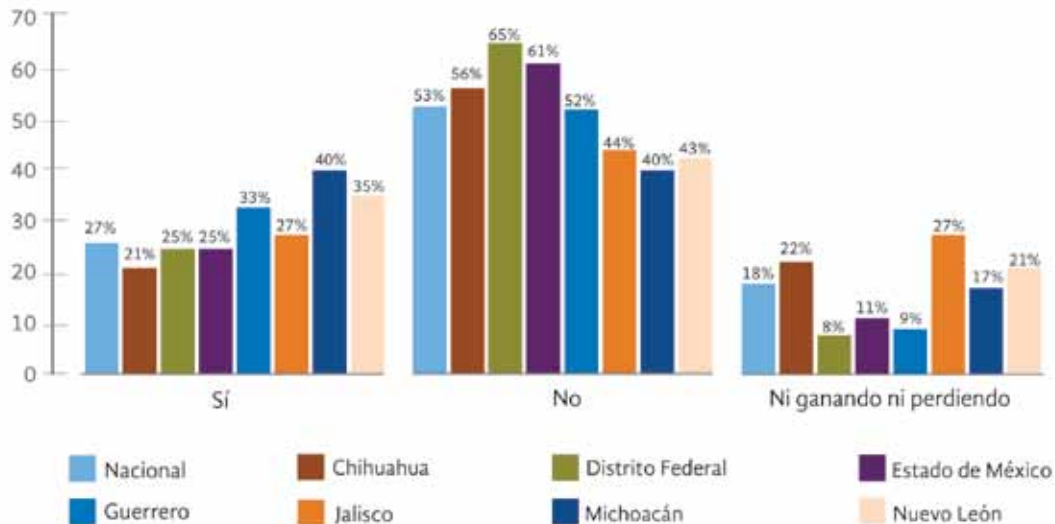
Los datos anteriores revelan, por un lado, que la población acepta a las fuerzas armadas y que la buena imagen presidencial no ha disminuido sustancialmente, a la par de que opina que se deben resguardar las libertades. Por otro lado, es claro que un importante segmento de la sociedad civil, como los académicos, cuya máxima expresión es el documento elaborado por la UNAM convocando a un pacto nacional en contra de la violencia;¹² los líderes de los movimientos sociales y de víctimas; y las opiniones de las élites políticas, empresariales y eclesiásticas, no concuerdan con la estrategia presidencial debido al incremento de la violencia y a los agravios de derechos humanos cometidos en los operativos por las fuerzas policíacas y militares.

Muchas encuestas revelan también posturas y pensamientos contradictorios que sobresalen en la población. En el caso de la Encuesta CIDENA 2011 esto fue evidente en relación con la evaluación que hacen los mexicanos sobre la guerra al narcotráfico. Lo

¹² "Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia", UNAM, México, agosto de 2011.

anterior contrasta con el respaldo positivo al presidente, pues al mismo tiempo que se está de acuerdo con la estrategia presidencial y con el desempeño de las fuerzas armadas, la población encuestada a nivel nacional que señaló que sí se está ganando la guerra fue tan sólo del 26 por ciento, mientras que el 53 por ciento tiene la opinión de que se está perdiendo.

Cuadro 6
En su opinión, ¿el gobierno está ganando o perdiendo la guerra contra el narcotráfico?



Con la respuesta No sabe, No contesta suma 100%

En los desagregados de la información que presenta la encuesta en siete estados del país es interesante destacar que es en el estado más golpeado por la violencia, Chihuahua, donde menor percepción de triunfo tiene la población, con el 21 por ciento. Otros estados donde hay altos índices de violencia criminal tienen una percepción más elevada que la media nacional, como Guerrero, con el 33 por ciento, y Nuevo León, con el 35 por ciento. El estado que más elevada percepción tiene de que se va ganando la guerra es Michoacán, con el 40 por ciento de la población a favor.

Mitos y realidades

La realidad de la violencia criminal, con alrededor de 50 mil muertos producto de los enfrentamientos, lleva a México a muchos dilemas: ¿por qué un gobierno debe cambiar una estrategia si la población la apoya?; ¿cuáles son los indicadores que sirven para evaluar dicha guerra?; ¿es el sólo hecho del incremento de víctimas razón suficiente para hablar de un *fracaso*, como lo sugieren la opinión especializada en la academia y la prensa, así

como numerosas agrupaciones de la sociedad civil? Todas estas son preguntas abiertas sobre las cuales la Encuesta CIDENA 2011 ofrece información empírica valiosa, pero resulta claro que hay muchos mitos alrededor de esta guerra, entre ellos que las élites políticas darán un viraje a la actual estrategia gubernamental –o a partes de ella–, sobre todo cuando la percepción de temor de la población lleva a buscar a los protectores, sean militares, policías, o la llamada por la ciencia política y la sociología la “Fuerza del Estado”.

2

NARCOTRÁFICO. PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD Y COMPORTAMIENTO POLÍTICO

*Mario Arroyo Juárez¹
Gerardo Rodríguez Sánchez Lara²*

El narcotráfico es un tema que ha estado presente en la realidad mexicana por más de cuatro décadas, aunque nunca con la primacía que ha ocupado desde el inicio de este siglo. La estrategia emprendida por los dos últimos gobiernos, principalmente el del presidente Felipe Calderón, de enfrentamiento directo ha modificado drásticamente la agenda política y de seguridad nacional, así como la realidad cotidiana de gran parte de la sociedad mexicana, sea de forma directa, en aquellos estados trastocados por la violencia, o por la saturación mediática del problema hacia toda la población, no importando si se vive en un lugar de alta conflictividad o no.

Así, los temas de seguridad y narcotráfico han penetrado en la esfera diaria de pensamiento, comunicación y convivencia de una forma tan estrecha que ha propiciado la generación de opiniones y posturas sobre las condiciones actuales y del futuro del país. Estas percepciones moldean tanto el imaginario colectivo sobre el cual se sustenta parte importante de las decisiones personales y sociales, como los hábitos cotidianos de la población y la aprobación o rechazo de una política pública o del gobierno.

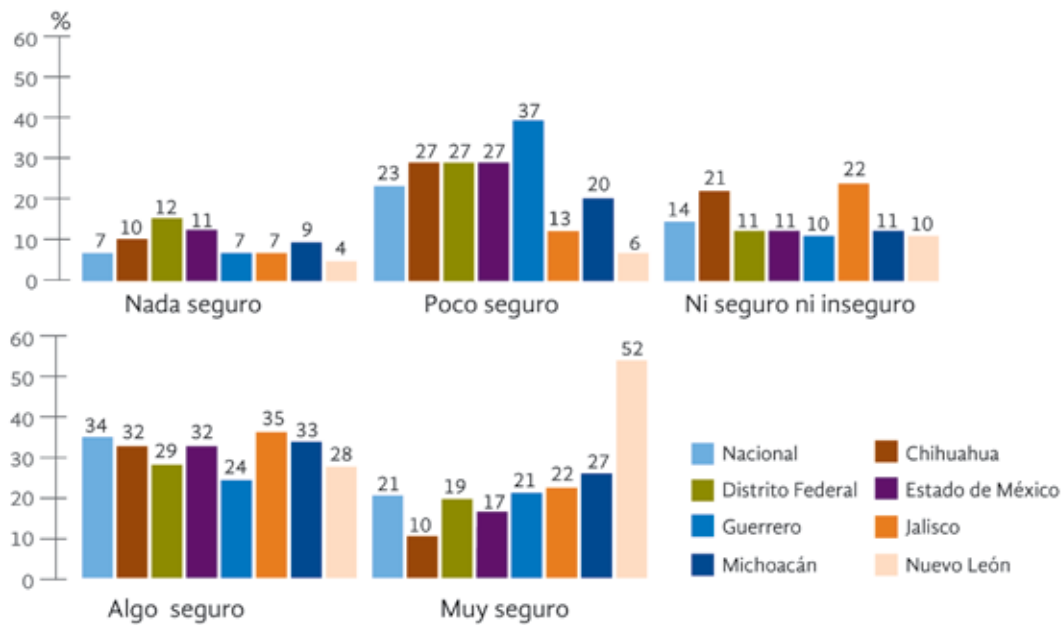
¹ Especialista en Política Criminológica y miembro de CASEDE.

² Especialista en Seguridad Nacional y miembro de CASEDE. Agradecemos a Tania Evelyn Sánchez por su colaboración en la realización de este artículo.

Las fuerzas armadas en las calles

Uno de estos cambios es la constante presencia de las fuerzas armadas en las calles de algunas ciudades, cumpliendo un rol de respaldo de la seguridad pública, lo que las lleva a tener un contacto directo con la ciudadanía. Por este motivo, una de las variables que mide la Encuesta *Ciudadanía, Democracia y Narcoviencia (CIDENA) 2011*³ se encuentra la percepción de seguridad que la población tiene debido a la presencia del ejército y la armada. A nivel nacional, el 55 por ciento de los encuestados manifestó sentirse muy seguro o algo seguro con las tropas en las calles, mientras que el 7 por ciento declaró sentirse nada seguro. Al igual que en otros rubros de la encuesta, en este tema existen diferencias regionales importantes. Dentro de los ciudadanos que se sienten muy seguros en presencia de los militares destaca Nuevo León, con un 52 por ciento, Michoacán 27 por ciento y Jalisco 22 por ciento. Por el contrario, los que manifestaron sentirse nada seguros, encabezan la lista el Distrito Federal 12 por ciento, Estado de México 11 por ciento y Chihuahua 10 por ciento. Hay que tener presente que el Distrito Federal y el Estado de México tienen muy poca actividad real de los cárteles y no hay despliegue de fuerzas militares.

Cuadro 1
¿Qué tan seguro se siente en presencia del Ejército?



Con la respuesta No sabe, No contesta suma 100%

³ Encuesta *Ciudadanía, Democracia y Narcoviencia (CIDENA), 2011*. 7,416 entrevistas a nivel nacional. Margen de error de +/- 1.1% con un 95% de confianza. Véase la encuesta completa en www.seguridadcondemocracia.org.

Para situar en contexto esta pregunta y otras relacionadas con la violencia generada por la delincuencia organizada es necesario considerar que las respuestas de los entrevistados pueden variar en función de que existan o no *operativos conjuntos* en sus lugares de residencia. Como los define el propio gobierno, estos operativos son:

[...] Mecanismos implementados por el gobierno federal para combatir al crimen organizado y que se fundamentan en el principio de subsidiariedad propio de cualquier sistema federal. Es decir, cuando un gobernador estima que requiere el apoyo de las fuerzas federales para garantizar la seguridad en su territorio se diseña la manera en la que elementos de las distintas corporaciones del gobierno federal se desplegarán para atender esta petición. Los elementos asignados a los operativos brindan soporte en áreas de inteligencia, administración y procuración de justicia. El objetivo es que se fortalezcan las regiones correspondientes y se genere mayor capacidad de contención de la acción delincencional. Son esfuerzos de cooperación con la autoridad local y no de suplantación de la misma.⁴

Estos operativos incluyen fuerzas combinadas de instituciones federales, como lo son la policía federal, el ejército y la armada, así como también en ocasiones otras fuerzas federales y estatales. También existen varios casos en que los operativos se realizan por fuerzas federales para sustituir a policías estatales o municipales “contaminadas” e infiltradas parcial o totalmente por los carteles. En este último caso, incluso en ocasiones ha habido enfrentamientos armados entre las policías que se resisten y las fuerzas militares.

De los estados que incluye CIDENA 2011 existían al momento del levantamiento de la encuesta *operativos conjuntos* en Guerrero y Michoacán; en Chihuahua uno dedicado exclusivamente a Ciudad Juárez y otro como parte de un esfuerzo regional denominado Triángulo Dorado, que también incorporó a los estados de Sinaloa y Durango. Nuevo León, por su parte, también contaba al momento de realizar la encuesta con el Operativo Noreste, que incluía también a Tamaulipas. En el caso de Jalisco, si bien no existía en 2011 ningún *operativo conjunto*, tuvieron lugar acontecimientos que generaron la presencia de fuerzas federales, destacando la organización de los Juegos Panamericanos en la zona metropolitana de Guadalajara.

Otra consideración es que para los encuestados, el sentirse *muy seguros* o *nada seguros* no depende sólo de la presencia militar, sino de las condiciones reales y subjetivas que prevalecen en los estados y en el Distrito Federal en al menos tres rubros: percepción de la seguridad, criminalidad registrada y victimización. Al respecto, CIDENA 2011 realizó varias preguntas que arrojan resultados comparables con otros estudios, pero también se desprenden hallazgos que abren nuevas perspectivas de análisis en torno a la percepción de la inseguridad y la modificación de conductas de los ciudadanos producto del *miedo al delito*. En este caso, la legislación mexicana y el gobierno se refieren a los actos de las personas involucradas en actividades criminales de tráfico de drogas o violencia como “delitos contra la salud” y “delincuencia organizada”, aunque los medios comúnmente mencionan el nombre genérico de narcotráfico.

⁴ Presidencia de la República, México, en www.presidencia.gob.mx/el-blog/los-operativos-conjuntos (consultada el 15 de marzo de 2012).

Por ejemplo, mientras que a nivel nacional el 61 por ciento declaró haber dejado de salir de noche por temor a ser víctima de la violencia relacionada con el narcotráfico, fue en los estados con *operativos conjuntos* o que tuvieron presencia de fuerzas federales donde se registraron los porcentajes más altos de temor: Chihuahua con 76 por ciento; Nuevo León con 70 por ciento; Guerrero, Jalisco y Michoacán con 67 por ciento.

Narcotráfico y vida cotidiana

La modificación de conductas o el cambio de rutina en algunas actividades cotidianas es uno de los principales aspectos de la vida social que se ven afectados negativamente cuando existen situaciones de violencia o de una percepción generalizada de ésta. Lo que una persona deja de hacer por miedo es un reflejo directo de lo que la gente más valora, ya que al temer perder algo se prefiere reducir movilidad, frecuencia en las relaciones sociales o cambiar patrones de diversión, esparcimiento o consumo.

Cuadro 2
Por temor a ser víctima de la violencia relacionada con el narcotráfico durante 2011 dejó de... (porcentaje)

	Nacional	Distrito Federal	Estado de México	Guerrero	Jalisco	Michoacán	Nuevo León	Chihuahua
Salir de noche	61	52	54	67	67	67	70	76
Salir a caminar a ciertas horas	49	48	48	45	40	48	63	67
Salir a cenar o divertirse	27	33	35	32	18	38	53	53
Ir al cine, conciertos o eventos deportivos	22	27	29	28	15	31	47	47
Tomar un taxi	22	38	31	22	15	26	35	44
Usar transporte público	15	25	26	16	13	24	31	38
Visitar ciertas zonas de la ciudad o localidad	42	42	42	43	21	43	54	53
Visitar parientes o amigos de su ciudad	35	33	34	39	18	48	49	40
Visitar parientes o amigos en otra ciudad	33	29	29	35	15	41	46	35
Salir a carreteras federales o estatales	30	30	27	26	14	40	48	34

Fuente: Elaboración propia con datos de CIDENA, 2011.

Incluso la misma crianza de los hijos y las rutinas familiares cambian como producto directo del temor a la delincuencia. En este sentido, el 49 por ciento de los entrevistados manifestó que por temor a ser víctima de la violencia relacionada con el narcotráfico no permitió que durante 2011 sus hijos salieran a la calle. Este porcentaje se elevó a 67 por ciento en el caso de Chihuahua, 63 por ciento en Nuevo León y 48 por ciento en Michoacán.

La percepción de inseguridad se ve reflejada también en los niveles de preocupación que genera la violencia del enfrentamiento entre los carteles. Destaca el alto porcentaje (92%) de los entrevistados en Nuevo León que manifestaron sentirse preocupados por este tipo de violencia relacionada con el narcotráfico. En Michoacán fue de 85 por ciento y en el Estado de México con 83 por ciento. Estos tres estados estuvieron por encima del 80 por ciento, que fue la media nacional.

¿Quién va ganando la guerra al narcotráfico?

Uno de los puntos más polémicos en el debate público es cómo nombrar al conflicto que se vive en México en relación con la violencia generada por la producción, tráfico y consumo ilícito de drogas. En su momento inicial en 2007, el presidente Calderón definió el problema como una “guerra contra el narcotráfico”, aunque luego de múltiples críticas al discurso bélico y por el empleo constante y creciente de las fuerzas armadas en labores policiales, el presidente decidió darle un giro conceptual y fue sustituida la palabra de “guerra” por lo que denominó “La lucha por la seguridad pública”. En una declaración singular en el año 2010, presentada como desplegado en medios impresos y después reforzada con un mensaje en cadena nacional, el presidente Felipe Calderón aclaró que:

La lucha es, pues, por la seguridad pública. Enfatizo lo anterior porque existe una percepción generalizada de que el objetivo del gobierno es “combatir el narcotráfico”. Usualmente las referencias a la acción del gobierno se etiquetan o refieren simplemente como una “guerra contra el narco” o “la lucha antinarco”. Esto, sin embargo, no es así. Nuestro objetivo medular es lograr la seguridad pública de los ciudadanos, y no única ni principalmente combatir al narcotráfico. Combatimos con determinación al crimen organizado, porque es nuestra obligación constitucional y ética, porque es obligación del gobierno federal hacerlo, pero también y fundamentalmente porque el crimen organizado ha alterado, de manera significativa, la paz de los ciudadanos.⁵

Como parte y haciendo eco de la percepción generalizada a la que se refiere el presidente Calderón, la Encuesta CIDENA preguntó si el gobierno está o no ganando la guerra contra el narcotráfico. A nivel nacional el 53 por ciento señaló que el gobierno federal no

⁵ Véase *Excelsior*, México, 16 de junio de 2010.

está ganando la guerra; el 26 por ciento considera que sí la va ganando y 18 por ciento considera que ni la va ganando ni la va perdiendo. También resulta interesante contrastar las opiniones de los ciudadanos con las de algunos especialistas en seguridad, que reflejan tres versiones de “la guerra contra el narcotráfico”: la optimista, la del fracaso y la del empate estratégico.

La visión optimista

La visión que le otorga legitimidad a la estrategia gubernamental, además por supuesto de las declaraciones oficiales, está principalmente representada por Joaquín Villalobos, quien en una serie de artículos⁶ ha planteado argumentos a favor, hasta cierto punto de justificación y racionalización positiva, de la estrategia del presidente Felipe Calderón. En uno de sus más recientes ensayos, Villalobos opinó que:

Se habla de “guerra perdida” porque erróneamente se piensa que la lucha de México es por combatir el narcotráfico, cuando de antemano se sabe que eso no es posible, porque mientras haya demanda existirá oferta. La lucha es en realidad por mejorar la seguridad de los mexicanos. [...] Indiscutiblemente, la estrategia del gobierno federal no es perfecta y requiere un esfuerzo de revisión y mejora constante, pero está asentada en cuatro pilares que no admiten discusión y cualquiera que gobierne a México necesitará continuarlos: reducir al máximo la densidad criminal; recuperar autoridad sobre los territorios que están en situación crítica; fortalecer las instituciones de seguridad y justicia; y alentar cambios cívicos en la conducta de los ciudadanos.⁷

La visión derrotista

Del otro lado está la visión que sostienen, entre otros, Jorge Castañeda y Rubén Aguilar, afirmando que la guerra contra el narcotráfico no está solucionando los principales problemas que el gobierno mexicano identificó al momento de emprender su estrategia, convirtiéndola en una “guerra fallida”. De acuerdo con estos autores, desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico México sigue siendo un país de tránsito de droga y el grado de consumo en el país no se ha reducido sino que, por el contrario, en algunos lugares ha aumentado. Asimismo, el alto grado de consumo en Estados Unidos, principal factor que alimenta a los cárteles mexicanos, también se ha mantenido constante, sin presentar una disminución significativa en los últimos años.

De la misma forma, el propósito de erradicar la violencia asociada al narcotráfico ha fallado, ya que el clima de violencia actual es superior del que se pretendía combatir. Por estas razones, Castañeda y Aguilar sostienen que la guerra contra el narcotráfico ha fracasado, y es solamente mediante otro tipo de estrategia como se pueden minimizar los efectos nocivos de este fenómeno.⁸

⁶ Véase Joaquín Villalobos, “Diez mitos”, *Nexos*, enero, 2010.

⁷ *Íbidem*.

⁸ Véase Rubén Aguilar V. y Jorge G. Castañeda, *El narco: la guerra fallida*, México, Punto de Lectura, 2009.

Empate estratégico

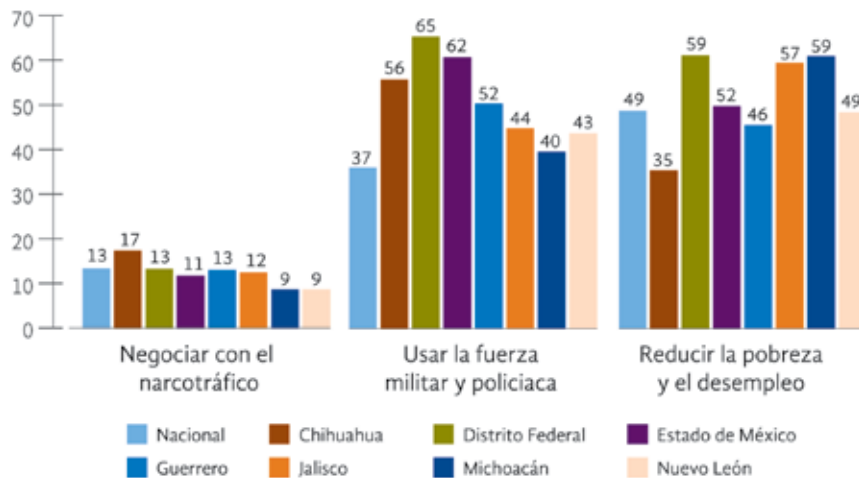
En una versión más mesurada, Raúl Benítez Manaut concluye en un ensayo que “es difícil afirmar categóricamente que el gobierno está *ganando la guerra*, pero también afirmar que *ya fracasó* la estrategia gubernamental es una hipótesis que no se sostiene. Por ello, se observa un *empate estratégico*, que se balanceará hacia una u otra dirección según tengan éxito las grandes campañas militares del gobierno y la estrategia de reestructuración de todas las instituciones de seguridad nacional, o si los cárteles, en sus reorganizaciones y en los enfrentamientos entre ellos, logran superar las adversidades e imponerse”.⁹

En esta visión se desprende la idea de que ambas partes tienen posibilidades de inclinar la situación a su favor, de acuerdo con las acciones y estrategias que desarrollen, pero sostiene la posibilidad de que el Estado mexicano pueda dar un viraje y así lograr avanzar en la guerra a las organizaciones criminales.

Las soluciones propuestas

Las diferencias en torno a la percepción sobre quién gana la guerra contra las drogas se acercan más a una posición de consenso cuando se trata de definir posibles soluciones para resolver el problema del narcotráfico. El 49 por ciento a nivel nacional afirma que reducir la pobreza y el desempleo es la mejor solución. Por el contrario, utilizar la fuerza militar y policiaca es una opción considerada por el 37 por ciento de los entrevistados. Sin embargo, una posición minoritaria pero importante del 13 por ciento sostiene que negociar con el narcotráfico sería una mejor salida.

Cuadro 3
¿Cuál sería la mejor estrategia para solucionar el problema del narcotráfico?



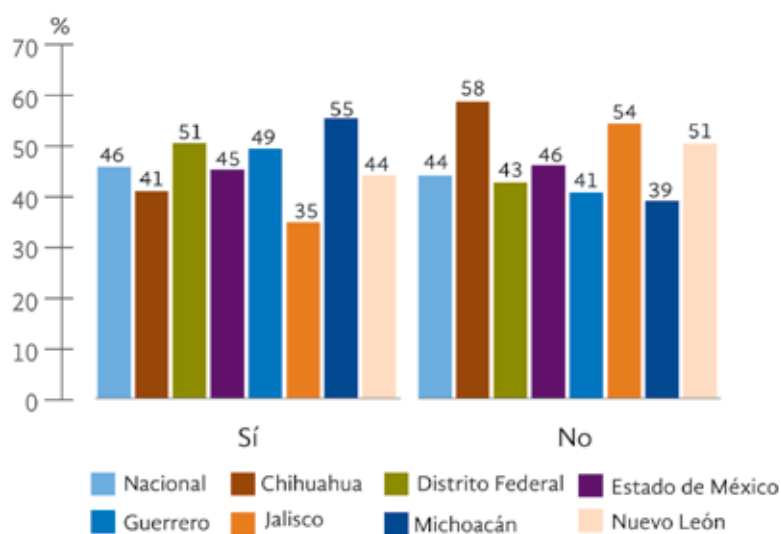
Con la respuesta No sabe, No contesta suma 100%

⁹ Raúl Benítez Manaut, “Seguridad nacional, crimen organizado y elecciones: tendencias”, *Este País*, vol. 20, núm. 245, septiembre de 2011, p. 18.

No negociar ha sido reiterado por el gobierno federal. El Presidente Calderón sentenció ante líderes del país que el gobierno federal “no ha negociado ni negociará con organización criminal alguna”.¹⁰ El nivel de acuerdo con esta posición es coincidente con el 65 por ciento de los entrevistados, que prefieren estar más de acuerdo en “votar por candidatos que combatan al narcotráfico aunque genere más violencia e inseguridad”.

La Encuesta CIDENA 2011 realiza, en lo referente a la relación entre violencia y narcotráfico con la democracia, una pregunta crucial: si la lucha o combate al narcotráfico puede obstaculizar la consolidación de la democracia en el país. La mayoría (46%) considera que sí se puede afectar la evolución democrática, aunque un porcentaje muy similar (44%) considera que no (cuadro 4). A nivel estatal los valores que destacan son los de Michoacán y Chihuahua. Para el 55 por ciento de los michoacanos entrevistados, el combate al narcotráfico sí representa un obstáculo para la democracia; mientras que la mayoría de los chihuahuenses entrevistados (49%) considera que este combate no es obstáculo alguno. Aquí sobresale que ambos estados han estado acosados de forma constante por la violencia en los últimos cinco años y que precisamente el primer gran operativo militar ordenado por el presidente Calderón en enero de 2007 tuvo lugar en Michoacán.

Cuadro 4
¿Considera usted que el combate al narcotráfico puede impedir la consolidación de la democracia en el país?



Con la respuesta No sabe, No contesta suma 100%

Al margen de que estos resultados deben analizarse con mayor cuidado y de que es preciso reflexionar sobre lo que los entrevistados entienden por “consolidación de la

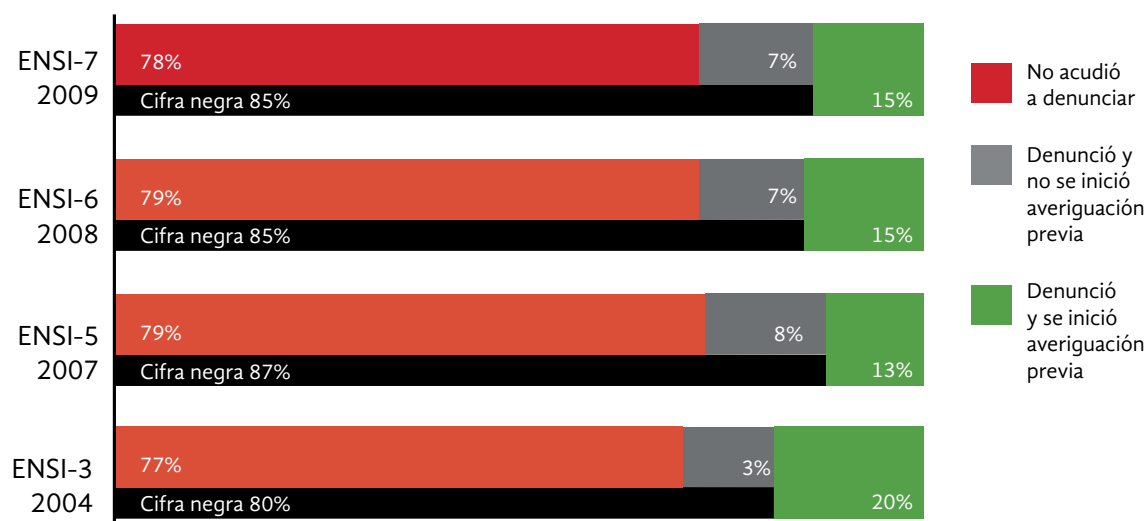
¹⁰ *El Universal*, 1º de diciembre de 2008, en www.eluniversal.com.mx/primer/32073.html

democracia”, llama poderosamente la atención que en Michoacán el tema de la intromisión del narcotráfico en la vida cotidiana es percibida por los ciudadanos como un riesgo y una constante. Por el contrario en Chihuahua, a pesar de que los índices de violencia (medidos sobre todo a través de las tasas de homicidios) son mucho más elevados, la ciudadanía no relaciona al narcotráfico como un actor relevante que afecte la vida democrática.

Desconfianza ciudadana, seguridad y democracia

Una de las principales razones por las cuáles las personas que han sido víctimas de un delito no denuncian es la desconfianza hacia las instituciones. Los resultados de las *Encuestas Nacionales de Inseguridad (ENSI)* que realizó el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI), arrojan datos muy similares para 2009, 2008 y con ligeras variaciones también al resto de las mediciones anteriores.

Cuadro 5
Delitos denunciados con averiguación previa y “cifra negra”



- En 2004 la información disponible es sobre el último delito del grupo de cada persona.
- En 2007, 2008 y 2009 los porcentajes se basan en todos los delitos captados en la encuesta.
- Como se aprecia, se presenta la cifra negra definida como la no averiguación previa.
- En ENSI-3 (2004) no se preguntó sobre la averiguación previa.
- Por efecto de redondeo en un año debe sumar siempre exactamente el 100%.

Fuente: ICESI. www.icesi.org.mx

Una de las conclusiones del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) al respecto es que: “El hecho de que los ciudadanos no denuncien tiene importantes consecuencias para el sistema de procuración y administración de justicia. La percepción que la ciudadanía tiene sobre este sistema y sus autoridades puede ser un factor que opere de forma negativa en contra de la información oficial en lo que respecta a los índices delictivos. Así, por ejemplo, las autoridades pueden dar a conocer una disminución en el número de delitos (con base sólo en las denuncias) y encontrar una barrera de incredulidad por parte de los ciudadanos”.¹¹

Si se analiza el asunto de la desconfianza ciudadana hacia las instituciones de procuración de justicia y seguridad en función de su complejidad, el asunto es más grave de lo que parece. Ya no se trata sólo de que una parte del Estado esté bajo la duda permanente de los ciudadanos, sino que lo que está en riesgo es, incluso, que se erosionen y pierdan también legitimidad y eficacia en otro tipo de instituciones, incluyendo las que le dan vida a la democracia. El argumento planteado aquí no es sencillo y su importancia amerita una explicación más amplia.

La tesis anterior, que la desconfianza ciudadana hacia las instituciones de seguridad y justicia puede afectar, en caso de no subsanarse, mejorarse o corregirse, los fundamentos del Estado democrático, sostiene que en el ejercicio de la función constitucional de proveer seguridad pública a los mexicanos, la transición en el poder de un partido a otro, ya sea en el ámbito nacional o en los locales, no se ha visto reflejada en una mejora de las condiciones de seguridad, si se toman en cuenta las cifras de delitos registrados, las tasas de criminalidad, las cifras de victimización y los resultados de la percepción ciudadana sobre la inseguridad.

A partir de los datos que muestran las propias encuestas ENSI o CIDENA 2011 resulta evidente que tanto a nivel federal como a nivel estatal, y sobre todo a nivel municipal, los gobiernos respectivos no han logrado revertir las condiciones de inseguridad. Por el contrario, en el mejor de los casos se observa un estancamiento de la situación, y en el peor los indicadores disponibles demuestran un deterioro de las condiciones de seguridad en México.

Ante esta situación se abren nuevas interrogantes que requieren de mayor investigación. Una de ellas es la relación existente entre seguridad y democracia. ¿Hasta qué punto las condiciones de inseguridad afectan el desarrollo democrático? Si la variable de la alternancia partidista no modificó sustancialmente las condiciones de seguridad, ¿dónde radica entonces el cambio que se requiere para tener políticas e instituciones de seguridad más eficaces? De no realizarse cambios sustanciales en las modalidades de formular políticas públicas en materia de seguridad, ¿cuáles pueden ser las consecuencias para la democracia? El hecho de que los ciudadanos vivan con un temor permanente hacia el delito, ¿qué consecuencias sociales tiene en su vida cotidiana y respecto de la calidad de la democracia a la cual se aspira, así como en el respaldo a las instituciones legalmente constituidas?

¹¹ Mario Arroyo, ENSI 5-2008, *Quinta Encuesta Nacional sobre Inseguridad: Resultados*, Cuadernos del ICESI, núm. 1, Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, México, 2009, p. 44.

Sobre este último punto existen, aunque escasos, algunos resultados de investigaciones que señalan que no existe una correlación directa entre seguridad y democracia. De acuerdo con Pablo Parás, en un estudio que realizó en la ciudad de México, entre mayor es el número de víctimas directas del delito éstas “se sentirán menos seguras, serán menos proclives a confiar en los otros y evitarán realizar ciertas actividades sociales de importancia. La información también señala que estos efectos pueden afectar a la democracia debilitando la confianza institucional y aumentando la preferencia por los sistemas autoritarios.”¹²

Aun cuando no hay todavía respuestas plausibles del porqué los ciudadanos no suelen asociar el mal desempeño de sus gobernantes en materia de seguridad pública con la política, y después sancionarlos negativamente en las urnas en lugar de abstenerse de participar electoralmente, sí existen algunos elementos de preocupación como el hecho de que dentro de la evaluación de confianza que se hace de las instituciones en México son precisamente varios de los actores involucrados en la arena democrática, y que tienen una responsabilidad directa en llevar a los gobernantes al poder, así como en emitir o aplicar leyes de seguridad, quienes resultan los peor evaluados: los partidos políticos, los diputados y la policía.

Conclusiones

El inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2007, además de ser un cambio de paradigma en la estrategia de seguridad, significó una modificación en el pensamiento y forma de vida de los mexicanos. Al analizar la opinión y las percepciones de la población relacionadas con el tema del narcotráfico en la Encuesta CIDENA 2011 hay elementos reveladores para poder arrojar resultados. En lugares con presencia activa de organizaciones criminales, la percepción de seguridad en presencia de las fuerzas armadas y la modificación de conductas cotidianas pueden ser adjudicadas a las dos variables: la presencia de las tropas en las calles de muchos pueblos y ciudades, y por la situación real de violencia que existe en cada localidad. Esta experiencia para la población es inédita y en ocasiones estas percepciones están determinadas de forma importante por la experiencia personal o cercana de cada encuestado, pero también hay una influencia importante de los medios de comunicación, por la saturación de información sobre el fenómeno. Esto es claro en la ciudad de México, donde no hay ni actividad violenta de los carteles de forma significativa ni militares en las calles.

Sin embargo, sobre cuestiones como la opinión acerca de si el gobierno está ganando o no la guerra, o si con el combate contra el narcotráfico se obstaculiza la consolidación de la democracia, se observa un espectro de opinión dividida; la optimista, la pesimista

¹² Pablo Parás. “Unweaving the Social Fabric: the Impact of Crime on Social Capital.”, en Wayne A. Cornelius y David Shirk (editores), *Reforming the Administration of Justice in México*. University of Notre Dame Press, Indiana, 2007, p. 341.

y la intermedia. En estos casos es difícil percibir qué determina cada tipo de respuesta, pues más allá de ser opiniones basadas en experiencias personales o concretas, éstas incluyen entre otras variables la influencia de los medios, la información disponible, los antecedentes y la ideología de cada encuestado, así como su grado de confianza en el gobierno. Por ello, este abanico de respuestas se puede interpretar como un espejo de la opinión nacional dividida.

Otra información novedosa e interesante de la encuesta es la que se desprende de la pregunta sobre qué sería lo mejor para solucionar el problema del narcotráfico y sobre la posibilidad de votar por candidatos relacionados con el narcotráfico o por aquellos que lo combaten. En estas opiniones podemos apreciar tendencias claras sobre lo que la mayoría de la sociedad mexicana rechaza. A pesar de estar influenciada por diversas cuestiones, la población se siente asolada y mantiene una opinión extendida a nivel nacional de reprobación del narcotráfico.

Estos resultados, además de reveladores, pueden extenderse a un análisis de contraste con las condiciones históricas que prevalecían al momento de la aplicación de la encuesta en los distintos estados y en el Distrito Federal. En particular, debería profundizarse en un análisis sobre los índices delictivos registrados (cifra oficial) y sobre la incidencia en la victimización (cifra oculta) que registran las encuestas de victimización realizadas por otras instituciones. La riqueza de la Encuesta CIDENA 2011 está en que abre nuevas posibilidades para la investigación y el análisis sobre cómo se construye la opinión de la sociedad sobre el narcotráfico, y en cómo impacta este hecho en la percepción que los ciudadanos tienen de su propia seguridad, la del país, e incluso en cómo ésta define o influye también en la visión que se tiene de la democracia en México.

En conjunto, resultan notables la desconfianza hacia las instituciones de seguridad civiles; el sentimiento de inseguridad y de miedo al delito por parte de los ciudadanos; la poca confianza en la democracia; la alta percepción de la corrupción de las autoridades; y la consideración de que la seguridad pública es el principal problema del país. Todo ello abre una situación de conflicto potencial, en tanto que las respuestas ofrecidas a través de políticas públicas se siguen postergando o no son bien apreciadas por la población. Los efectos de esta situación pueden anticipar un deterioro aún mayor de la percepción positiva que los ciudadanos tienen de la democracia, que podría reflejarse en una baja participación ciudadana en general en los asuntos públicos, la seguridad incluida, dejando una ventana de oportunidad para que los partidos políticos, a pesar de su baja confianza y credibilidad ciudadana sigan siendo, a pesar de todo, los actores principales de la vida pública. Así, se genera un círculo perverso donde ni la alternancia partidista ni la democracia representan medios útiles para mejorar las condiciones de seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos.

3

CONFIANZA Y PARTICIPACIÓN ECONOMÍA, SOFISTICACIÓN POLÍTICA Y CAPITAL SOCIAL

*Felipe González y González¹
Rodrigo de León González²*

La vida en sociedad está basada en diversos pilares, pero dos fundamentales son la confianza y la participación ciudadana.

Como podemos comprender, aunque las evidencias sean sumamente valiosas es difícil verificar todos los factores relacionados con nuestra vida, por lo que construimos más en torno a la confianza que a la evidencia. Ante la imposibilidad del ciudadano de poder evaluar científicamente el desempeño de actores e instituciones, desarrollamos juicios generales acerca de ellos, en buena medida influenciados por la confianza que nos generan; a la vez, si el juicio es positivo la confianza se va incrementando con el tiempo y demeritando si el juicio es negativo.

El ciudadano realiza sus juicios con base en su entorno cercano, a veces sin considerar factores externos o datos a detalle, desarrollando una percepción que refleja una realidad específica, razón por la cual son importantes los estudios como la Encuesta CIDENA, pues mediante una muestra representativa nos arroja una opinión generalizada y el grado de confianza que ha desarrollado la sociedad.

En CIDENA 2011, para las categorías de *economía y sofisticación política* incluimos preguntas acerca de los poderes políticos relacionados con los tópicos de la encuesta, así como sobre la percepción de la economía del país.

Para la categoría de *capital social* evaluaremos los niveles de organización; la colaboración y la participación social; la relación con las organizaciones de la sociedad civil (osc) y el respeto a la ley.

¹ Presidente ejecutivo del CEGI-IPADE

² Director del CEGI-IPADE

Al final de este capítulo podremos contar con una visión de la confianza y la percepción que tienen los ciudadanos acerca de los actores e instituciones del país que mantienen una relación intrínseca con los temas políticos y económicos registrados en CIDENA 2011, así como habremos realizado una lectura del estado del capital social de México representado por el grado de participación ciudadana.

Economía y sofisticación política

Aún cuando la economía y la política son dos disciplinas y ámbitos distintos, ciertamente existe una relación natural entre ambas, de modo que ante la percepción de los ciudadanos generalmente las políticas públicas correctas coinciden con el éxito económico.

Es natural que un régimen autoritario con una economía deficiente tienda a emprender una transición hacia la democracia, aunque del mismo modo una democracia presenta riesgos de transitar a dictadura si los resultados económicos son negativos, pues como se comentó hay una relación directa entre ambas variables.

La aprobación ciudadana respecto de los gobernantes y las instituciones puede influir en la percepción de la economía y viceversa; no obstante, esta relación no es necesariamente proporcional, pues existen factores, como las crisis económicas, causados por situaciones externas que afectan esta relación. En el caso de esta encuesta podemos observar cómo el 58 por ciento aprueba algo o mucho el trabajo del presidente de la República, en tanto que el 67 por ciento de la población califica como mala o muy mala la situación económica de México.

Cuadro 1
Confianza institucional:
¿qué tanto aprueba o desaprueba la forma en que el presidente de la República, el Ejército, la Marina y los jueces realizan su trabajo?

	Aprueba algo o mucho	Desaprueba totalmente o poco
Presidente	58%	30%
Ejército	72%	14%
Marina	69%	13%
Jueces	31%	41%

Se devela un grado aceptable de confianza en el jefe del Ejecutivo, que en un país con sistema de gobierno presidencial es seguramente la figura política con mayor potestad y simbolismo, aunque al mismo tiempo la percepción sobre la economía es considerablemente negativa. Si bien es cierto que la aprobación al trabajo del presidente es de la mayoría de la población, la percepción sobre la situación económica afecta de tal modo que dicha aprobación no llega a porcentajes aún mayores.

Por otra parte, podremos analizar el contraste nacional entre la aprobación que presentan instituciones como el Ejército y la Marina con niveles del 72 por ciento y 69 por ciento, respectivamente, frente a la calificación de los jueces, cuyo nivel de aprobación es de apenas el 31 por ciento.

Cuadro 2
¿Cómo calificaría la actual situación económica del país?

Muy buena o buena	Muy mala o mala
31%	67%

A nivel regional encontramos estados como Nuevo León, en donde la actividad militar es evidente y el índice de aprobación hacia dicha institución es muy alto. En ese estado se aprecia que el 80 por ciento aprueba algo o mucho la forma en que el Ejército realiza su trabajo, en tanto que en entidades como el Distrito Federal, donde la presencia militar es mínima, la aprobación disminuye al 59 por ciento.

En resumen, los niveles de aprobación de las instituciones políticas relacionadas directamente con nuestra encuesta arrojan resultados mayoritariamente positivos, pero en la perspectiva económica sólo el 29 por ciento de los ciudadanos opinan que la economía mejorará en los próximos meses. De este modo develamos que la confianza en las instituciones políticas analizadas es mayor que la confianza en el futuro económico del país.

Cuadro 3
Pensando en los próximos 12 meses,
¿usted diría que la economía del país mejorará o empeorará?

Mejorará algo o mucho	Empeorará algo o mucho
29%	38%

Capital social

El análisis sobre política y economía presenta la percepción y la confianza de la sociedad respecto del país; el capital social, por su parte, significa la participación ciudadana existente.

La confianza en las instituciones es fundamental para generar una percepción positiva del entorno, pero también para promover la participación de la sociedad, que en ocasiones no se genera por un incentivo positivo como lo es la confianza misma, sino ante las crisis o la necesidad de participación ciudadana por la falta de políticas públicas efectivas

por parte del gobierno. En cualquier escenario, un país no puede crecer o mejorar sus condiciones sociales, políticas y económicas si no tiene una sociedad civil participando activamente en los asuntos de la ciudad.

En el caso del tercer sector (social) en México tendríamos que referirnos necesariamente a la sociedad civil organizada, pues es el parámetro más adecuado para definir la participación ciudadana. Esto puede significar pertenecer o asociarse a partidos políticos, fundaciones, asociaciones religiosas o vecinales, cuyo común denominador es que tienen personalidad jurídica.

En nuestro país existe un sector social poco desarrollado, en el que algunas organizaciones de la sociedad civil han alcanzado grados de eficiencia destacables, aunque gran parte de ellas tienen problemas financieros, de voluntariado, permanencia e institucionalización, a la vez que su capacidad de maximizar el impacto social es deficiente.

Ciertamente vivimos la herencia de lo que Octavio Paz denominaba el “ogro filantrópico”, es decir, un Estado paternalista que cubría las necesidades de la población, en ocasiones en su mínima expresión. Se trata de un Estado que no promovió la participación de la sociedad civil. Esta herencia la comprobamos hoy en la escasa capacidad de organización ciudadana, lo cual representa una gran restricción para el desarrollo de las OSC.

Actualmente se calcula que en Estados Unidos existen un millón de osc, en Chile 83 mil y en México 20 mil.³ Y si bien es cierto que el primer país triplica la población del nuestro, tiene 50 veces mayor número de fundaciones. Chile, por su parte, tiene seis veces menos población y cuatro veces más cantidad de este tipo de organizaciones que México.

Cuadro 4
¿Usted o algún miembro de su familia participa en alguna organización de la sociedad civil?

Sí	No
9%	90%

Por supuesto, el bajo número de osc tiene una relación directa con las personas que las emprenden, las integran y se encargan de su operación y proyectos; de acuerdo con la encuesta de CIDENA, sólo el 9 por ciento de los ciudadanos participan en alguna osc, dato que se corrobora con el 8 por ciento que contestó haber participado en alguna asociación en el último año. En una categoría muy similar, este mismo porcentaje coincide con las personas que han sido voluntarios en alguna asociación caritativa.

Este bajo grado de participación podría relacionarse con la falta de confianza en la capacidad de organización; por ejemplo, sólo el 41 por ciento de las personas opina que

³ Datos de la Organización de Naciones Unidas, en Gonzalo de la Maza, *Construcción democrática, participación ciudadana y políticas públicas en Chile*, Universidad de Leiden, Leiden, 2010.

existe probabilidad de que la gente de su colonia se organice para resolver problemas de servicios públicos; el 33 por ciento para resolver problemas de delincuencia; el 29 por ciento para resolver cuestiones de contaminación y medio ambiente; y el 24 por ciento para resolver asuntos de índole político.

Cuadro 5
Qué tan probable o poco probable es que en su colonia o comunidad la gente se organice para...

	Muy o algo probable	Nada o poco probable
Resolver problemas de servicios públicos	41%	58%
Resolver problemas de delincuencia	33%	65%
Resolver problemas de contaminación	29%	70%
Resolver problemas de índole político	24%	74%

Además, el análisis arrojó que los ciudadanos no colaboran para resolver problemas o necesidades en su colonia o comunidad, principalmente porque consideran que a cada quien le interesan sus propios problemas o la gente no se pone de acuerdo.

Evidentemente, como se observa en la encuesta, la gente expresa mayor capacidad de organización respecto de problemas que considera prioritarios o urgentes, como los servicios públicos o la delincuencia; sin embargo, sería deseable que independientemente del tópico, estos ciudadanos participaran de manera organizada.

Quizás el problema de fondo no sea la falta de disposición para participar, sino la ausencia de liderazgos e incentivos, pues encontramos que el 56 por ciento de las personas estarían dispuestas a aportar tiempo para resolver problemas de su colonia, el 53 por ciento a aportar trabajo y el 32 por ciento dinero.

Cuadro 6
Para resolver problemas en su comunidad, ¿qué tan dispuesto estaría a aportar...?

	Muy o algo dispuesto	Poco o nada dispuesto
Tiempo	56%	44%
Trabajo	53%	47%
Dinero	32%	67%

Es importante recordar que dependiendo de la disposición para participar de los ciudadanos y de su capacidad de organización se genera la colaboración que este país requiere entre el tercer sector, el sector gubernamental y el sector privado para poder resolver los problemas de fondo y alcanzar una economía estable y con alto crecimiento.

Finalmente, un dato interesante es que el 34 por ciento de los encuestados, si creyera que está en lo correcto estaría dispuesto a ir en contra de la ley; aunque este porcentaje incluye a aquellos que casi siempre o siempre lo harían, demuestra que debemos trabajar mucho en la generación de confianza en las instituciones: como gobiernos fortaleciendo las existentes y como ciudadanos creando nuevas por medio de la sociedad civil organizada.

Cuadro 7
Cuando cree que está en lo correcto,
¿usted estaría dispuesto a actuar en contra de lo establecido por la ley?

Siempre o casi siempre	Nunca o casi nunca
34%	62%

4

SEGURIDAD, ¿A QUÉ COSTO? DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES CIVILES

Azucena Cháidez¹ y Edgar Valle²

La aprobación y desaprobación de la estrategia del gobierno en el combate al narcotráfico es uno de los temas que permanentemente se discuten. Dependiendo de la coyuntura y a cinco años de iniciada la guerra contra el narcotráfico, las críticas hacia esta estrategia se hacen más o menos evidentes, más o menos reiteradas, se politizan, se enmascaran de recetas académicas, o sencillamente disminuyen. Sin embargo, más allá de su manifestación mediática, está claro que dentro de la diversidad que existe en nuestro país pueden hallarse posturas encontradas de aprobación y desaprobación frente a esta estrategia entre el grueso de la ciudadanía que no cuenta con un acceso privilegiado a los medios.

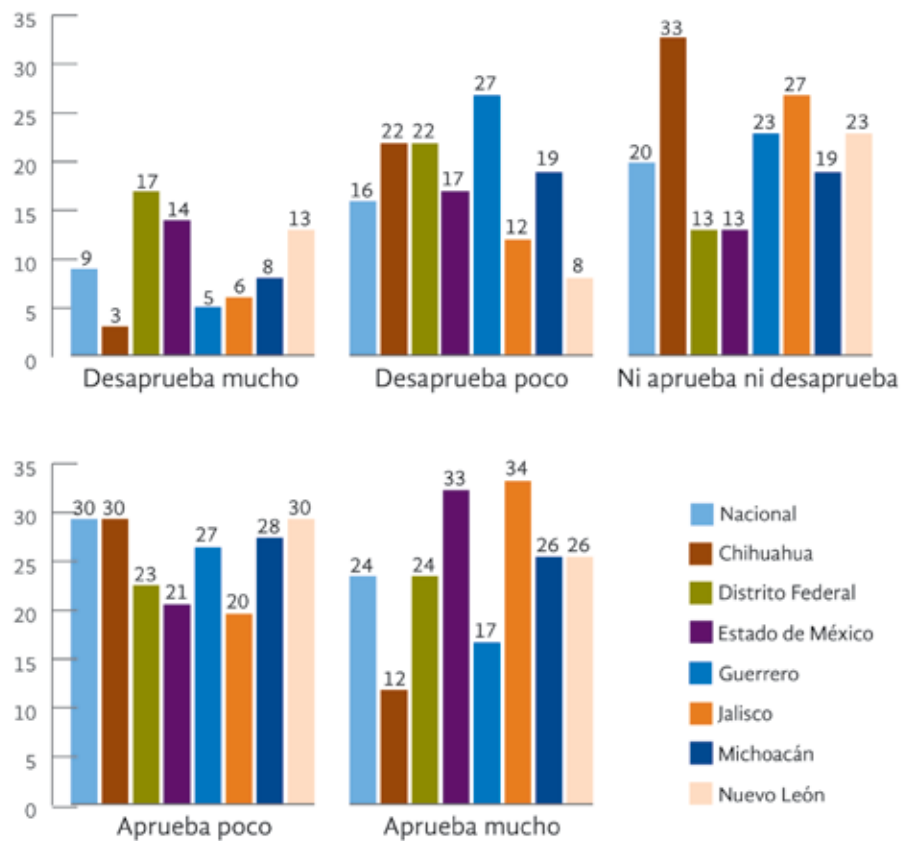
De acuerdo con los datos recabados en la Encuesta *Ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia 2011*, más de la mitad de los mexicanos están de acuerdo con las acciones del gobierno para combatir el narcotráfico (54%), frente a un cuarto de ellos que se manifiesta en contra (25%). La distribución interna de estos datos muestra que el 24 por ciento de los encuestados aprueban mucho la estrategia, 30 por ciento la aprueban poco, 9 por ciento la desaprueban mucho, 16 por ciento la desaprueban poco y 20 por ciento ni la aprueban ni la desaprueban. Si bien estos números nos hablan de una media nacional, la primera intuición es buscar diferencias regionales que maten esas cifras. Sin embargo, cuando se analizan las diferencias entre estados

¹ Directora asociada, SIMO Consulting.

² Director asociado, SIMO Consulting.

y regiones se observa que los niveles de aprobación no se encuentran tan alejados de la media nacional, siendo quizá Chihuahua y el Distrito Federal los sitios en donde existen los niveles más bajos de aprobación a la estrategia, con 42 por ciento y 47 por ciento respectivamente. Bajo este mismo criterio, donde sí encontramos diferencias importantes por estado es en los niveles de desaprobación. Claramente el Distrito Federal es la entidad que cuenta con el mayor porcentaje de ciudadanos que desaprueba la manera en que el gobierno combate al narcotráfico, con un 39 por ciento de encuestados que se manifiestan en este sentido, seguido por el Estado de México y Guerrero, ambas entidades con 31 por ciento de ciudadanos que desaprueban la estrategia. Un punto que resulta importante destacar es que, con la excepción de Guerrero, la mayoría de los ciudadanos que desaprueban esta estrategia son residentes del centro del país, en particular de la mancha urbana que se extiende desde la ciudad de México hacia la periferia, incluyendo ciertas zonas de los estados aledaños. En el resto de las regiones y entidades federativas, aun cuando los niveles de aprobación no sean altos –como en el mencionado caso de Chihuahua–, los niveles de desaprobación tienden a estar muy cercanos o por debajo de la media nacional (25%).

Cuadro 1
¿Usted qué tanto aprueba o desaprueba las acciones del gobierno para combatir al narcotráfico?



Con la respuesta No sabe, No contesta suma 100%

Los que están a favor y en contra

Con la intención de tener una radiografía de los factores que moldean la opinión pública en torno al tema del combate al narcotráfico, más allá de las diferencias regionales, se analizaron los patrones demográficos, ideológicos y partidistas que comparten el 54 por ciento de los ciudadanos que aprueban la estrategia del gobierno federal. En primer lugar, los resultados muestran que existe una alta correlación entre la identificación partidista y la aprobación de la estrategia, pues el 43 por ciento de las personas que se definen a sí mismas como “muy panistas” son también quienes “aprueban mucho” la estrategia federal, seguidos por aquellos que se definen como “muy priístas”, de los cuales el 37 por ciento también “aprueba mucho” la estrategia contra el narcotráfico, lo cual contrasta con sólo el 24 por ciento de aquellos que se definen como “muy perredistas” y “aprueban mucho” la estrategia.

En segundo lugar, destaca el hecho de que a mayor escolaridad mayor es la propensión a apoyar la estrategia. Esta tendencia es clara particularmente en los niveles más altos de escolaridad, entre los ciudadanos que cuentan con grados universitarios, incompletos o completos, e incluso con posgrado, pues entre estos segmentos poblacionales el nivel de aprobación a la estrategia es de 62 por ciento, 60 por ciento y 80 por ciento respectivamente, mientras que las personas con primaria completa e incompleta están más cerca de la media poblacional de 54 por ciento, con 58 y 57 por ciento. Finalmente, cuando se analiza por rangos de edad tenemos que las personas que más aprueban la estrategia están entre los 45 y los 59 años, seguidos por los ciudadanos que están entre los 35 y los 44 años. Por género no existen diferencias significativas en este sentido.

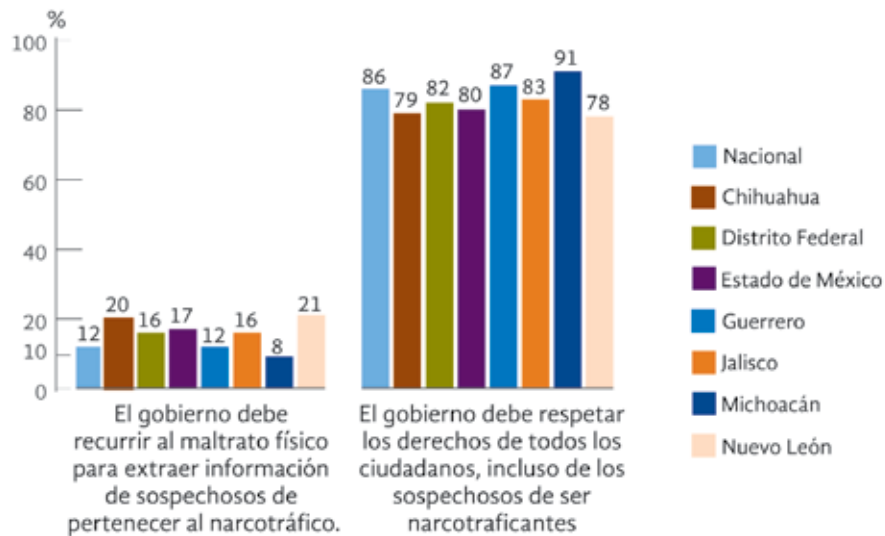
Al hacer este mismo ejercicio entre los ciudadanos que “desaprueban” la estrategia de combate contra el crimen organizado encontramos que el 43 por ciento de los encuestados que se definen a sí mismos como “muy perredistas” desaprueban la estrategia, seguidos por el 33 por ciento de aquellos que se consideran “algo perredistas”. En cuanto a las características demográficas destaca que los mexicanos con niveles de educación media alta; es decir preparatoria completa e incompleta, son los más proclives a estar entre el grupo que desaprueba, pues el 33 por ciento de los mexicanos con preparatoria completa “desaprueban la estrategia”, mientras que el 28 por ciento de los que tienen preparatoria incompleta se pronuncian en este sentido. Por último, en cuanto a los rangos de edad, encontramos que los mexicanos entre los 18 y 24 años, junto con las personas mayores de 60 años, son los más proclives a “desaprobar” la estrategia seguida hasta ahora por en el combate al narcotráfico.

Libertades y derechos

La estrategia del gobierno para combatir al narcotráfico en nuestro país también ha puesto de relieve la capacidad de la población para adaptarse a una situación de violencia que la ha obligado, en algunos casos, incluso a modificar sus hábitos cotidianos y su lugar de residencia. El debate público ha abordado algunos de las decisiones que ha tenido que tomar

la población, sin embargo, hay cosas que pareciera que los mexicanos no están dispuestos a sacrificar en la lucha contra el narcotráfico: sus libertades y sus derechos.

Cuadro 2
Algunas personas piensan que es válido recurrir al maltrato físico en la guerra contra el narcotráfico



Con la respuesta No sabe, No contesta suma 100%

La Encuesta CIDENA 2011 plantea que la disyuntiva derivada de la estrategia para el combate al narcotráfico parece darse entre la batalla por establecer un Estado de derecho, a pesar de que pueda representar algunas trabas, o bien, ceder libertades hacia un Estado que podría incluso pensarse como autoritario. En un contexto en el que la población demuestra poca confianza en los cuerpos policíacos pueden entenderse los siguientes resultados: la mayoría de la población mexicana se manifestó de acuerdo con que debemos preservar las libertades y derechos alcanzados, aún si ello dificulta el combate al narcotráfico (86% a nivel nacional). Existe, sin embargo, un 12 por ciento que considera que es necesario recurrir al maltrato físico (tortura). Si bien es mucho menor a los que consideran prioritario proteger los derechos y las libertades, estamos frente a un segmento de la población mexicana que estaría dispuesto a sacrificar derechos. Este porcentaje nos obliga a pensar en los elementos detrás del mismo.

Esta situación, si bien es la tendencia nacional, tiene matices en estados que concentran algunos de los índices más altos de violencia como en Chihuahua, donde se incrementa el porcentaje de la población dispuesta a ceder libertades y derechos en esta batalla (33%, Cuadro 3). Esto contrasta con la situación de Michoacán, que si bien también mantiene altos niveles de violencia, sólo el 18 por ciento de su población está de acuerdo con perder

libertades y derechos y el 81 por ciento se niega a cederlos para facilitar la lucha contra el narcotráfico. La diferencia podría atribuirse quizás a un periodo de violencia más prolongado en Chihuahua, si se considera que con anterioridad al inicio de la estrategia de combate al narcotráfico este estado ya tenía serios problemas de seguridad.

El intercambio de seguridad a cambio de libertades, si bien no es aceptado por la gran mayoría de la población, es una situación que ya comienza a suscitarse en el país, aun si todavía no adquiere tintes alarmantes. No es ajeno a los medios de comunicación que en zonas consideradas como “rojas” las personas ya no salen de noche, evitan viajar en horarios y por áreas específicas, e incluso en algunos casos han cambiado su lugar de residencia. Quizás estos cambios en la dinámica cotidiana de la población no se consideran aún como graves, pero no dejan de ser una limitante al derecho de libre tránsito. Hoy estas situaciones no se visualizan como “ceder” libertades.

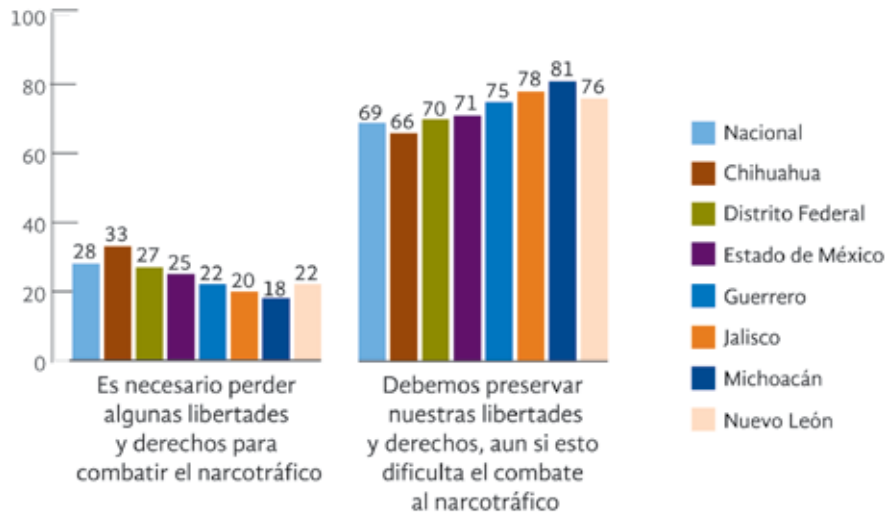
Derecho a la integridad personal

El derecho a la integridad personal es uno de los que, bajo los regímenes autoritarios y en situaciones de conflicto, tiende a ser vulnerado con mayor facilidad, por la tentación que representa recurrir al maltrato físico para obtener información. En México, este derecho ha sido consagrado en la Constitución y ha sido ratificado en varios tratados internacionales que nos integran a sistemas regionales e internacionales de protección a los derechos humanos. Con todo, hoy en día el 12 por ciento de los mexicanos están de acuerdo con que el gobierno debe recurrir al maltrato físico para extraer información de los sospechosos de pertenecer al narcotráfico.

De acuerdo con los datos el 86 por ciento de los mexicanos se manifiesta a favor de que el gobierno respete los derechos de todos los ciudadanos, incluso de los sospechosos de ser narcotraficantes. En específico, el estado de Michoacán es el que muestra un consenso más alto al respecto, pues el 91 por ciento de su población se manifiesta en este sentido, mientras que en el estado de Nuevo León es donde este consenso es más bajo, con un 78 por ciento que sostiene esta posición.

En la posición contraria, el grupo de los que están de acuerdo con que el gobierno utilice el maltrato físico para extraer información a nivel nacional representa el 12 por ciento de la población. A nivel estatal se observa que son Nuevo León y Chihuahua donde este grupo es más amplio, pues representan el 21 y 20 por ciento, respectivamente. ¿Quién conforma este sector poblacional? Más de la mitad (56%) son mujeres y el 42 por ciento son mayores de 48 años de edad. Coincide además que el 68 por ciento dice estar poco o nada interesado en la política. A este grupo se le señaló que esto significa que el gobierno podría violar los derechos humanos de gente inocente y se le preguntó si aun conociendo esta posibilidad seguiría apoyando el maltrato físico. El resultado fue que a nivel nacional, el 42 por ciento de quienes originalmente se posicionaron a favor del maltrato físico reiteraron su postura y el 54 por ciento desistió de ella. Esto significa que el 5 por ciento de la población mexicana se ha manifestado de acuerdo en el uso del maltrato físico por parte del gobierno como una forma de obtener información, y lo ha hecho de manera consciente.

Cuadro 3
¿Se deben preservar o sacrificar las libertades en el combate al narcotráfico?



Con la respuesta No sabe, No contesta suma 100%

En un país con un sistema de justicia que todavía deja mucho que desear, que además está inmerso en una “guerra” en contra del narcotráfico que ha dejado más de 50 mil decesos, este dato puede pensarse como uno de los efectos colaterales de la violencia, o bien, como un déficit de la cultura de la legalidad en una nación en la que “una calentadita” no es un término difícil de escuchar en referencia a las detenciones. En cualquier caso, en una sociedad que busca ser democrática, como la nuestra, representa una asignatura pendiente.

Estado de derecho

El problema con la situación de seguridad que se vive en México consiste en que la opinión pública afecta, de forma ineludible y gradual, nuestras actitudes como ciudadanos y la relación con lo público, modificando nuestras demandas políticas e incluso alterando los valores ciudadanos, que son el eje rector de una democracia. Una situación que desgraciadamente en México comienza a presentarse.

Notas de prensa sobre linchamientos en algunas localidades del país y la evidencia de que en ciertas comunidades se han formado grupos de autodefensa, pagados directamente por la población, nos llevó a los coordinadores de la primera Encuesta *Ciudadanía, Democracia y Narcotráfico* (CIDENA) 2011, a preguntarle a la gente su opinión al respecto. Los resultados, dignos de analizarse a fondo, muestran que en nuestro país las preocupaciones en torno al tema de la seguridad comienzan a tener un impacto sobre las concepciones

de lo que la gente considera “justo” o admisible, sobre todo cuando ello está directamente relacionado con su seguridad personal, pues frente a la pregunta: “¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con que las comunidades se organicen para linchar delincuentes?”, 59 por ciento de la población menciona estar en desacuerdo, mientras que 40 por ciento declara estar a favor. Lo que sorprende de este dato es que aun cuando la mayoría de la población reprueba los linchamientos, un 40 por ciento de los mexicanos esté de acuerdo con que la gente tome la justicia por propia mano (Cuadro 4). De igual forma, al preguntar “¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con que las comunidades se organicen en grupos de autodefensa?”, encontramos que 41 por ciento de la población rechaza esta medida, pero más de la mitad de los encuestados (58%) está de acuerdo con ella (Cuadro 5).

Cuadro 4

Algunas comunidades asediadas por la violencia han empezado a tomar justicia por su propia mano y han linchado delincuentes. ¿Qué tan de acuerdo está usted con que las comunidades se organicen para linchar delincuentes?

Algo o muy de acuerdo	Poco o nada de acuerdo
40%	59%

Cuadro 5

Algunas comunidades asediadas por la violencia del narcotráfico han empezado a organizarse para crear grupos de autodefensa. ¿Qué tan de acuerdo está usted con que las comunidades se organicen en grupos de autodefensa?

Algo o muy de acuerdo	Poco o nada de acuerdo
58%	41%

Aunque estos datos sólo son representativos a nivel nacional resulta evidente que existen ciertas tendencias regionales en cuanto a estas percepciones relativas a tomar la justicia o no por propia mano, o de intentar sustituir el monopolio legítimo de la violencia en manos del Estado. Por ejemplo, en los sitios en que los enfrentamientos con el crimen organizado han sido más frecuentes el apoyo a este tipo de actitudes aumenta, mientras que en zonas urbanas donde existen mayores niveles educativos y donde los enfrentamientos con la delincuencia organizada son muy escasos, o sólo se viven a través del flujo de información, ese apoyo disminuye. Sin embargo, a pesar de estas diferencias regionales es innegable que la violencia constante que se ha vivido en los últimos años comienza a afectar la visión del ciudadano común, debilitándose algunas de las premisas básicas que fundamentan todo Estado de derecho, como la confianza y la delegación

ciudadana en las instituciones públicas de impartición de justicia y salvaguarda de la seguridad.

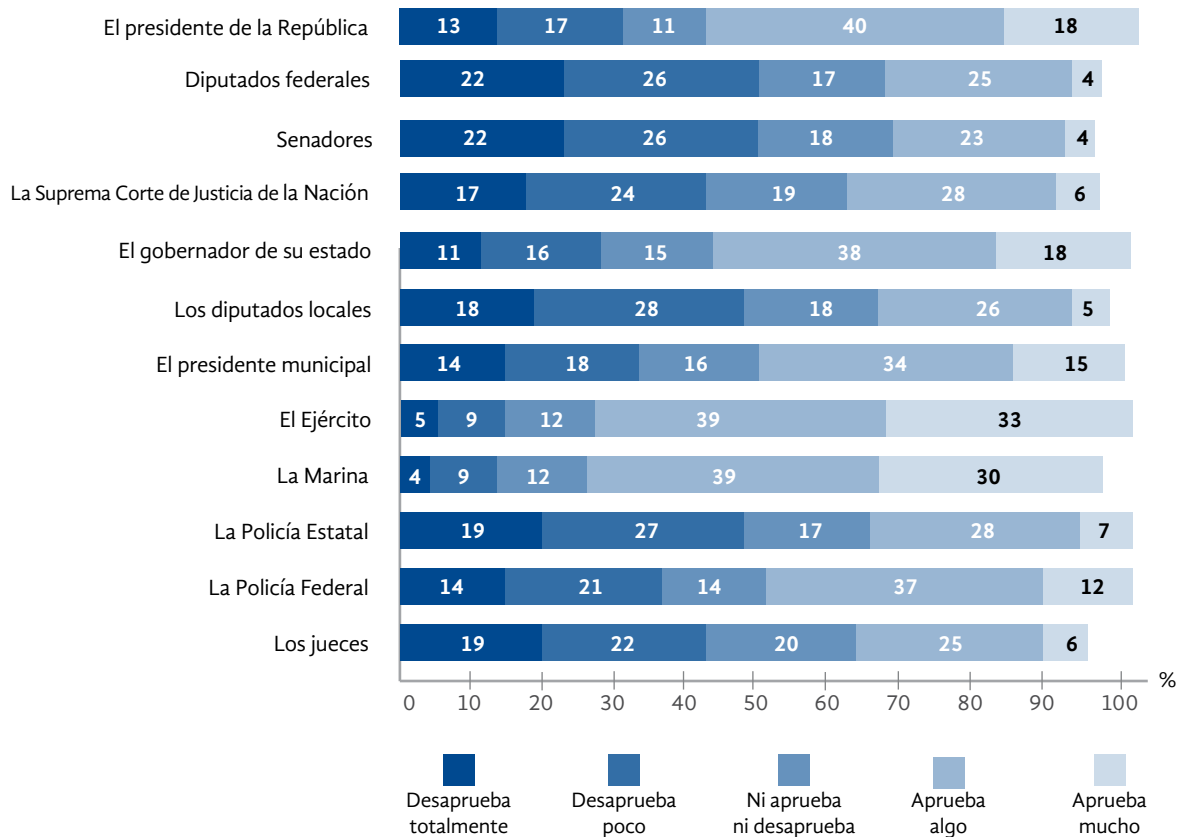
Más que una crítica fácil a la “guerra” contra el crimen organizado, estos datos deberían servir para reflexionar sobre la responsabilidad que conlleva la aplicación de la violencia legítima, sobre todo cuando se hace por periodos prolongados. Sin duda, convencer a la ciudadanía de que una “guerra” es justa es parte fundamental de la comunicación política de cualquier Estado, pero no puede ser lo único. Mostrar a la población en momentos de crisis que las instituciones se robustecen, que se trabaja por mejorarlas y que el respeto de la ciudadanía a ellas es fundamental y es lo que realmente permite ganar las guerras. La experiencia histórica internacional lo demuestra. Es ahí donde se necesita un verdadero *spin* en la opinión pública.



NEXO*

CONFIANZA INSTITUCIONAL

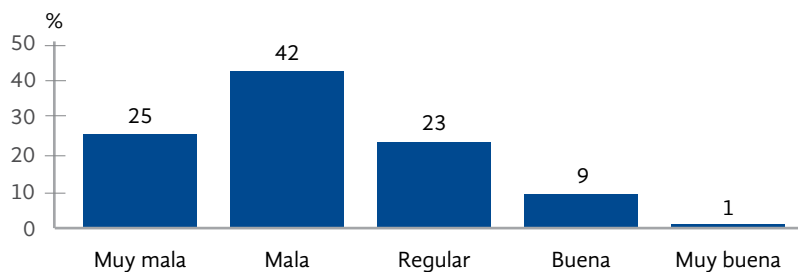
1. ¿Qué tanto aprueba o desaprueba la forma en que las instituciones del Estado realizan su trabajo?



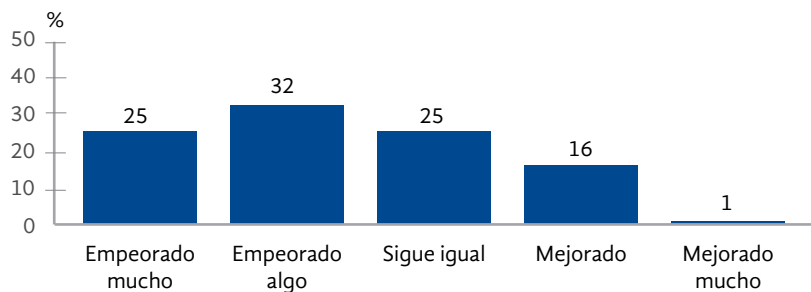
* Todas las gráficas y cuadros del Anexo suman 100% con la respuesta No sabe , No contesta.

ECONOMÍA Y OPINIÓN PÚBLICA

2. Independientemente de su situación económica personal, ¿cómo calificaría la actual situación económica del país?
Diría que es...

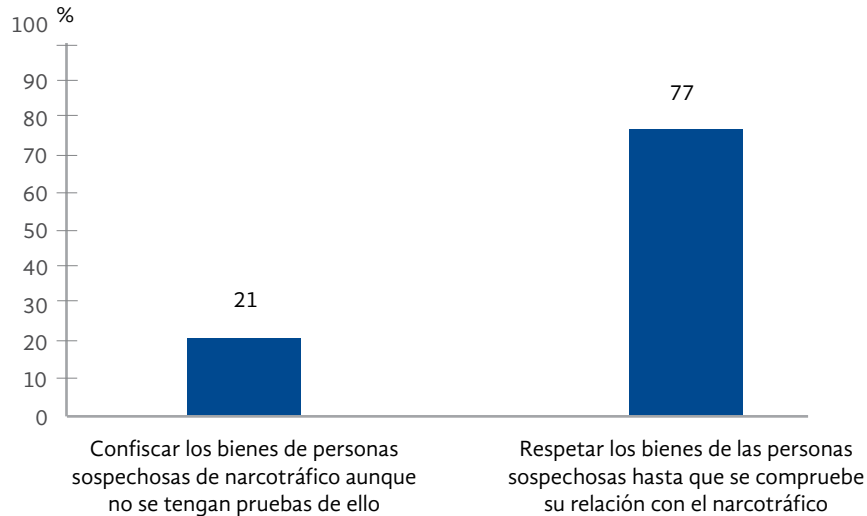


3. Independientemente de su situación económica personal, ¿durante los últimos 12 meses usted diría que la economía del país ha mejorado o ha empeorado?, ¿mucho o algo?

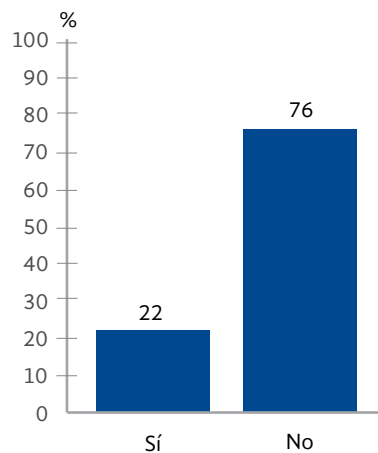


IDEOLOGÍA, VALORES Y NARCOTRÁFICO

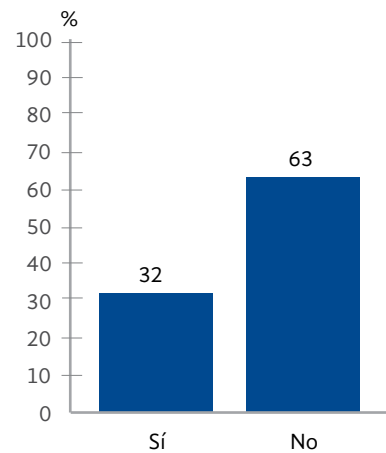
4. ¿Está de acuerdo en confiscar los bienes de los sospechosos de narcotráfico, aunque no existan pruebas en su contra?



5. En su opinión, ¿debería legalizarse el consumo de marihuana?

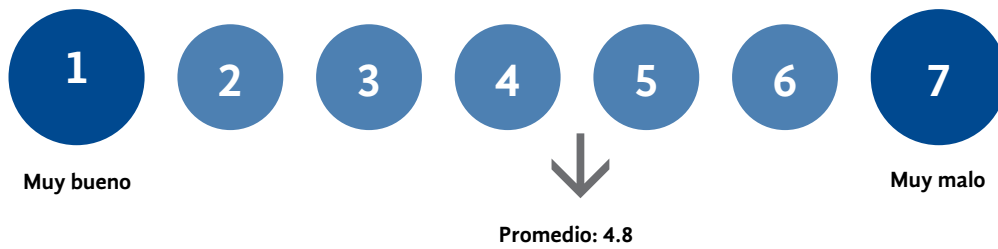


6. En su opinión, ¿debería legalizarse el matrimonio entre personas del mismo sexo?

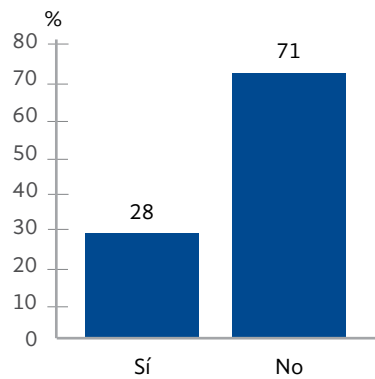


JUSTICIA Y REFORMA PENAL

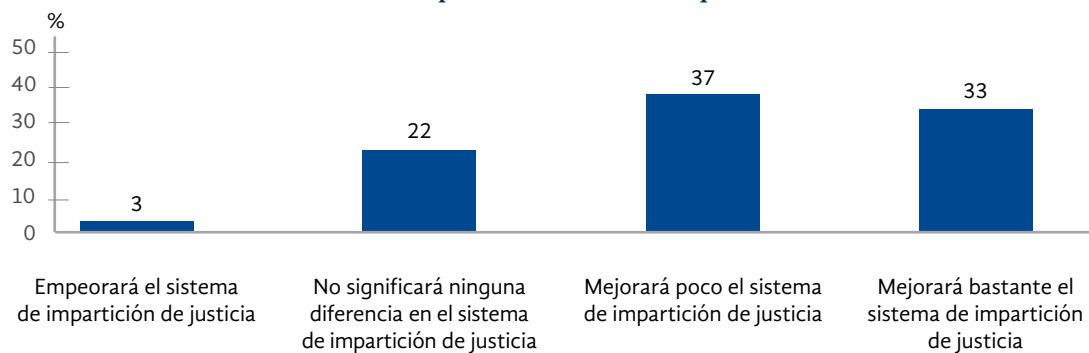
7. ¿Cómo calificaría al sistema de justicia penal en su estado?



8. ¿Ha escuchado sobre la reforma penal que incluye la incorporación de juicios orales en la impartición de justicia?

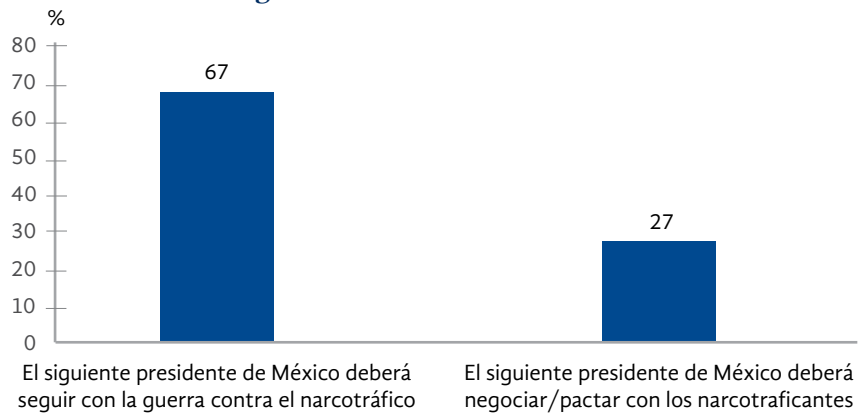


9. En su opinión esta reforma penal...

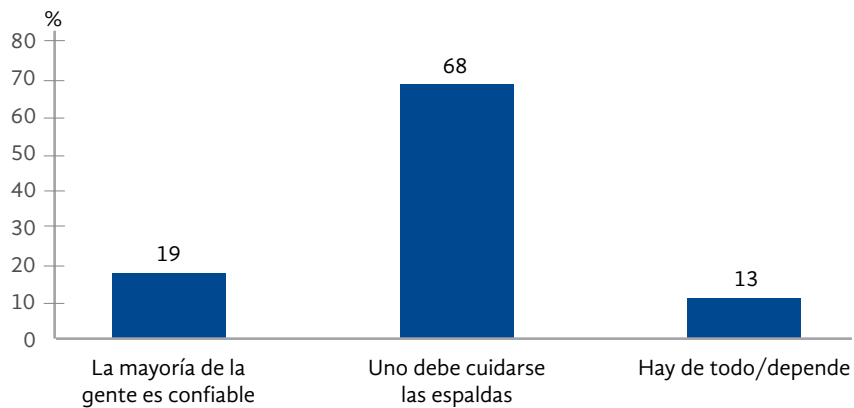


DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES CIVILES

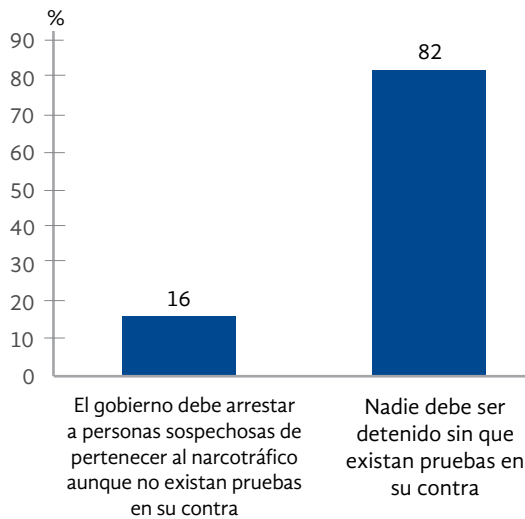
10. ¿Debe el próximo presidente continuar la guerra contra el narcotráfico?



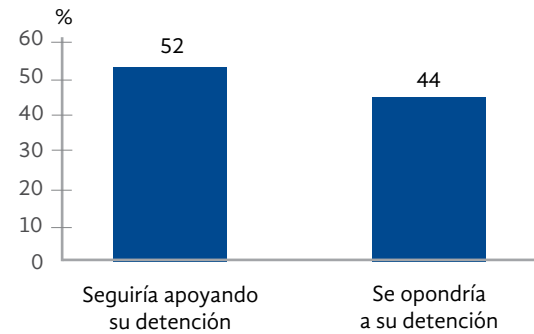
11. ¿Diría usted que la mayoría de la gente es confiable o que la mayoría de las veces uno debe cuidarse las espaldas?



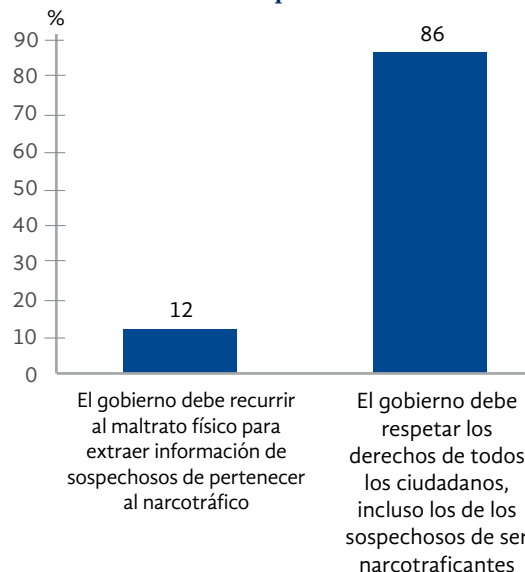
12. ¿El gobierno debe arrestar sospechosos de ser narcotraficantes?



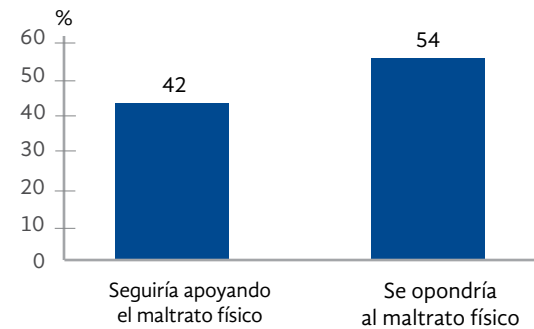
13. Esto que me acaba de responder podría implicar que habría personas que podrían estar encerradas sin que existen pruebas en su contra. Si este fuera su caso, ¿seguiría apoyando o se opondría a su detención?



14. ¿Está de acuerdo con que se recurra al maltrato físico para extraer información de los sospechosos?

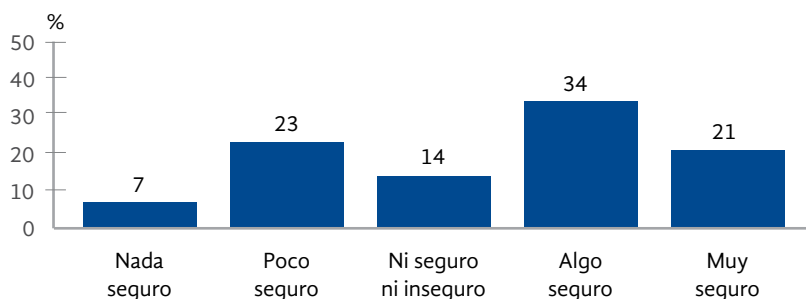


15. Si recurre a la tortura, el gobierno podría violar los derechos humanos de gente inocente. Si este fuera el caso, ¿seguiría apoyando el maltrato físico o se opondría?

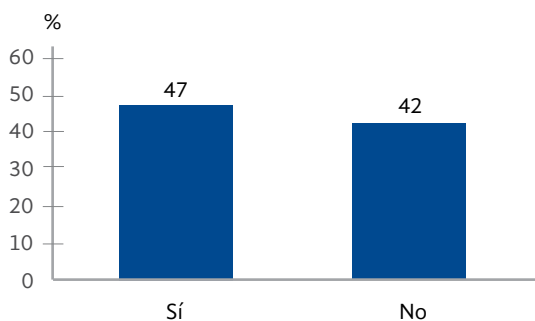


COMPORTAMIENTO POLÍTICO E INSEGURIDAD

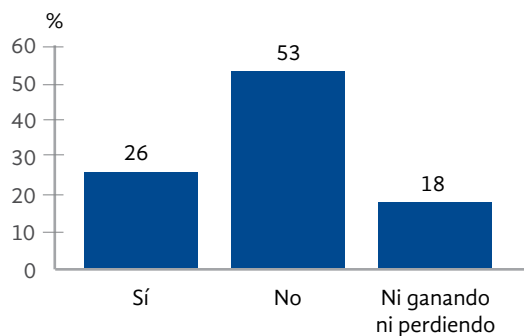
16. ¿Qué tan seguro se siente en presencia del Ejército?



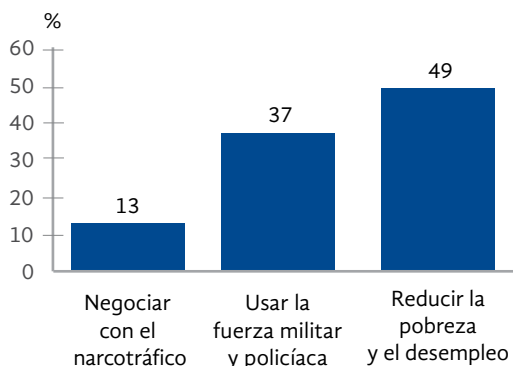
17. ¿Cree usted que el Ejército ha sido corrompido por el narcotráfico?



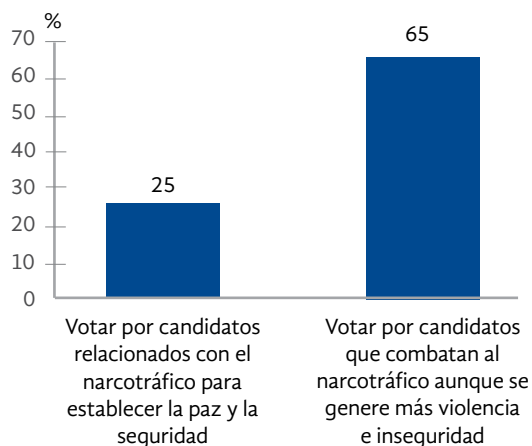
18. En su opinión, ¿está el gobierno ganando la guerra contra el narcotráfico?



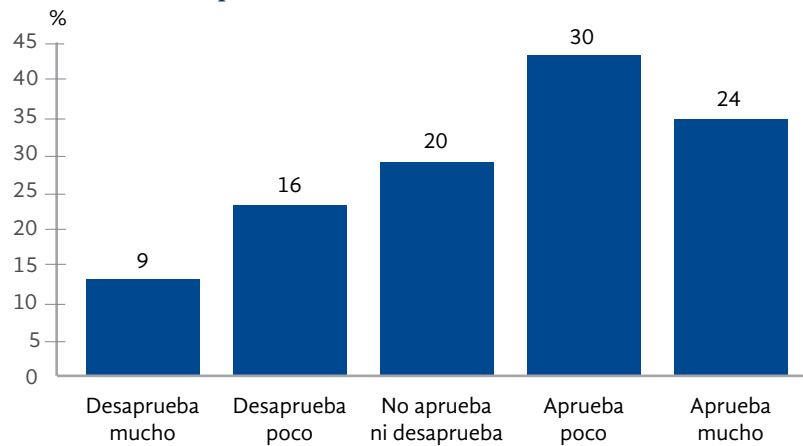
19. ¿Cuál cree usted que sería la mejor opción para solucionar el problema del narcotráfico?



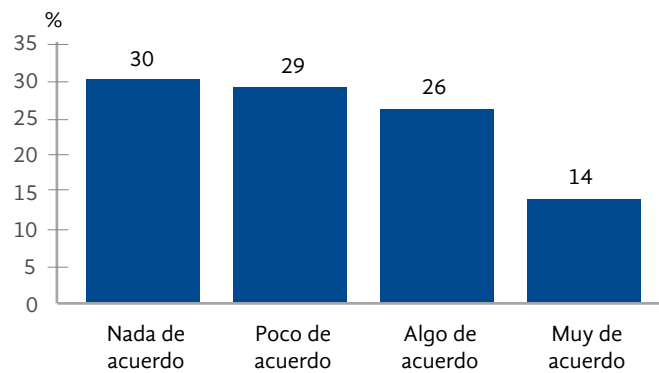
20. ¿Con cuál de las siguientes decisiones políticas estaría usted más de acuerdo?



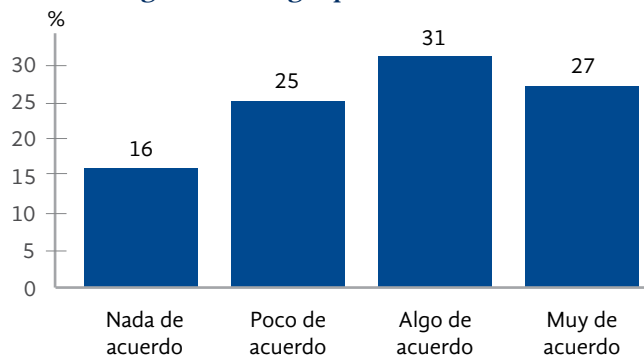
21. ¿Qué tanto aprueba usted las acciones del gobierno para combatir al narcotráfico?



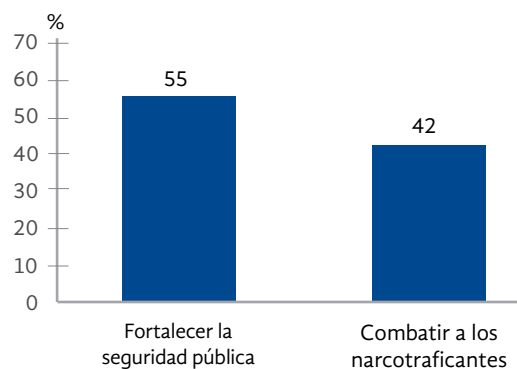
22. ¿Qué tan de acuerdo está usted con que las comunidades se organicen para linchar delincuentes?



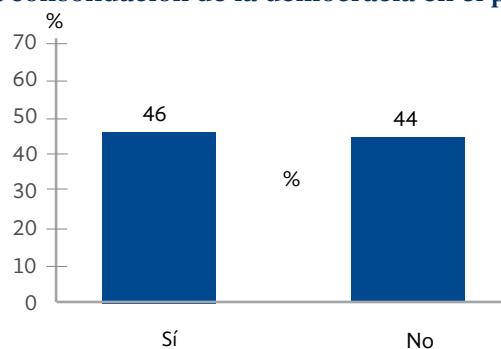
23. ¿Qué tan de acuerdo está usted con que las comunidades se organicen en grupos de autodefensa?



24. ¿Qué considera más importante, que el gobierno fortalezca la seguridad pública o que combata a los narcotraficantes?



25. ¿Considera usted que el combate al narcotráfico puede impedir la consolidación de la democracia en el país?

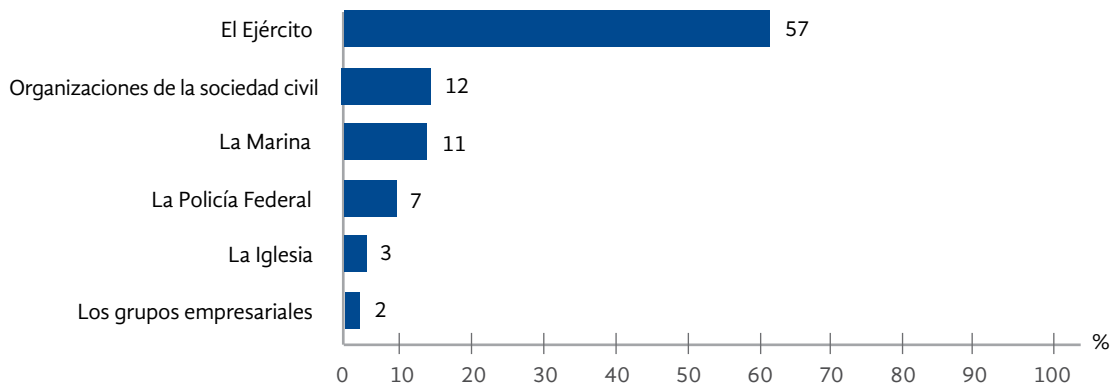


26. ¿Por cuál de las siguientes razones cree usted que el presidente decidió emprender la lucha contra el narcotráfico?



SEGURIDAD Y VICTIMIZACIÓN

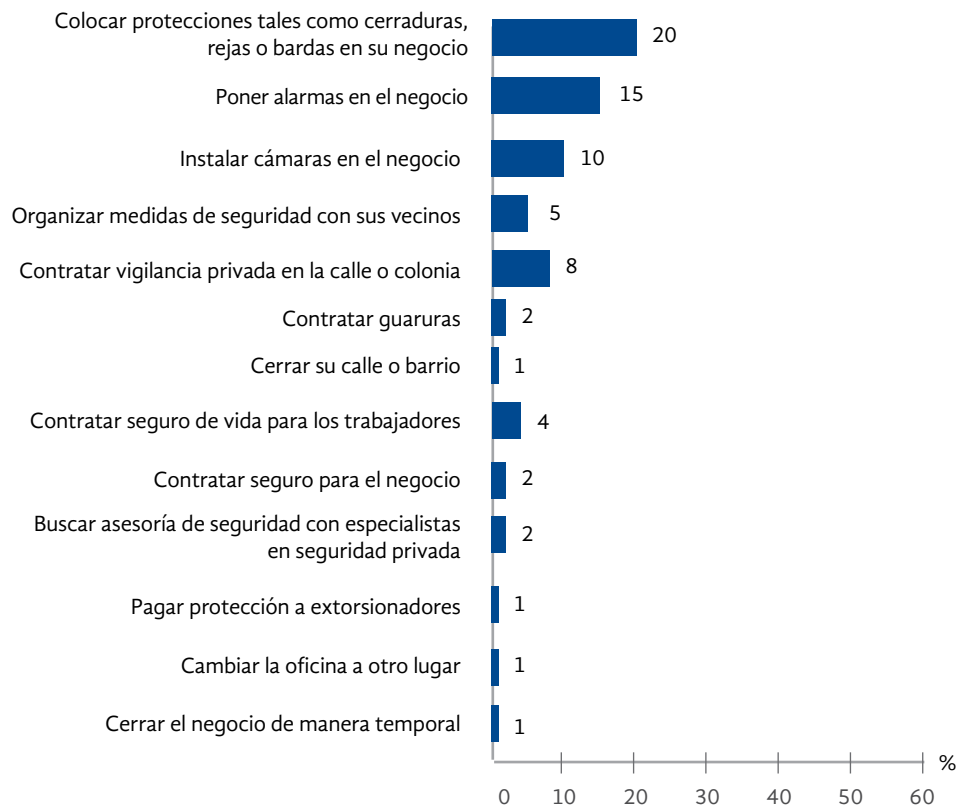
27. ¿Cuál de los siguientes grupos considera usted que ha ayudado más a disminuir los efectos de la violencia derivada del narcotráfico?



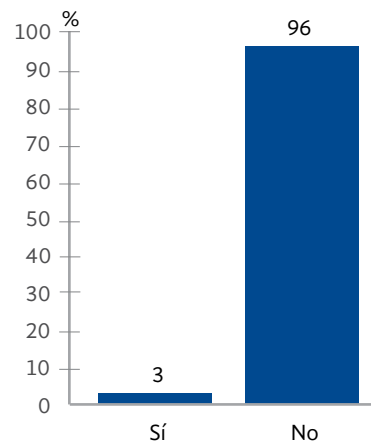
28. Para protegerse de la violencia relacionada con el narcotráfico ¿se tomaron algunas de las siguientes medidas en su casa?



29. Algunos centros de trabajo están tomando medidas de seguridad. Durante este año, para protegerse de la violencia relacionada con el narcotráfico ¿se tomaron algunas de las siguientes medidas en su trabajo?



30. ¿Algún familiar fue asesinado o murió de manera violenta en el último año?

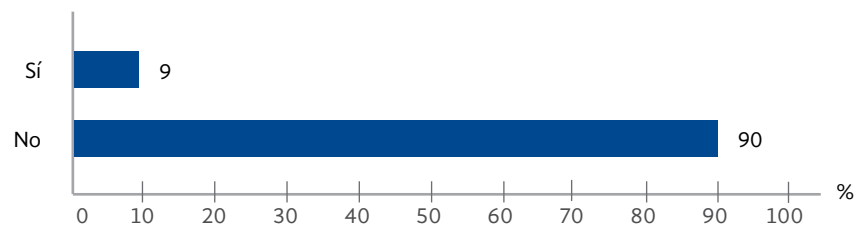


31. ¿Experimentó usted algún suceso violento durante el último año?



CAPITAL SOCIAL

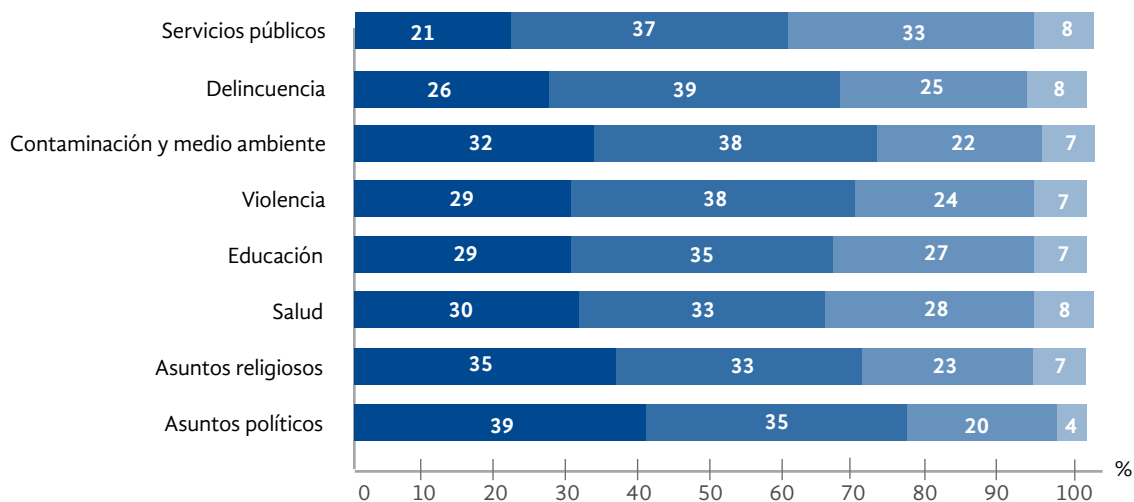
32. ¿Participa activamente usted o algún miembro de su familia en alguna organización de la sociedad civil?



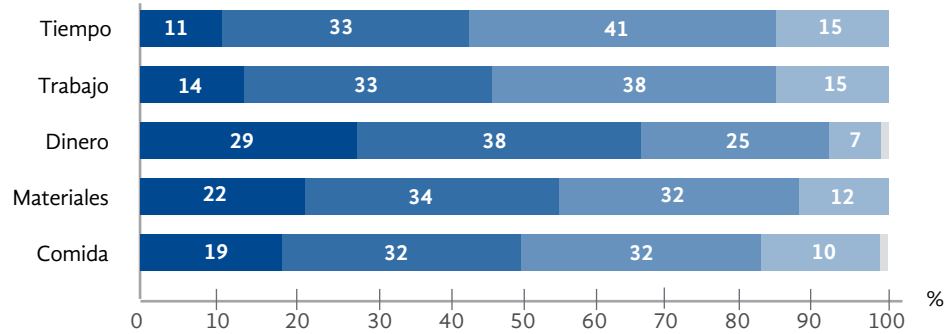
33. ¿Participa en alguna de las siguientes organizaciones?



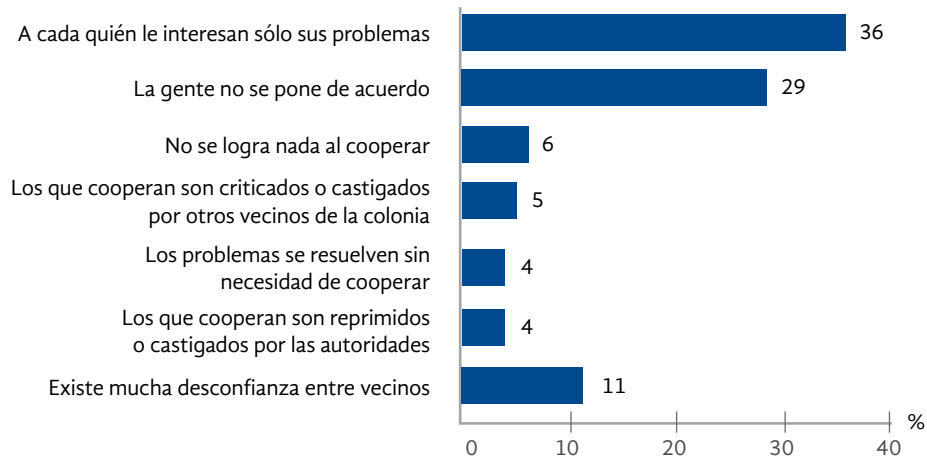
34. ¿Qué tan probable o poco probable es que en su colonia o comunidad la gente se organice para resolver problemas de...?



35. Para resolver problemas en su comunidad, ¿qué estaría usted dispuesto a aportar?



36. La gente no colabora para resolver problemas o necesidades en su colonia/comunidad porque...



37. Cuando cree que está en lo correcto, ¿usted estaría dispuesto a actuar en contra de lo establecido por la ley?

